



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

CUARTO PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA

11.ª SESIÓN

PRESIDE

EL SEÑOR SENADOR ERNESTO AGAZZI

Presidente

y

EL SEÑOR SENADOR CARLOS BARÁIBAR

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI,
JOSÉ PEDRO MONTERO Y VIRGINIA ORTIZ

Concurre en régimen de Comisión General el señor Ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, acompañado por el señor Subsecretario Lauro Meléndez, la señora Directora de la Coordinadora Interdireccional, Mariana Drago, el señor Director de Evaluación y Monitoreo, Juan Pablo Labat, y el señor Director Nacional de Desarrollo Social, Soc. Francisco Terra.

SUMARIO

	Páginas		Páginas
1) Texto de la citación.....	1176	4) Retraso del Ministerio de Salud Pública en suministrar la información correspondiente al segundo semestre de la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.....	1176
2) Asistencia.....	1176		
3) Asuntos entrados.....	1176		

–Manifestaciones del señor Legislador Abdala

- 5) **Comparecencia del señor Ministro de Desarrollo Social, economista Daniel Olesker, para que informe acerca de los resultados de los programas**

principales del Ministerio a su cargo, la evaluación de los mismos, sus costos y los impactos esperados en todo el territorio nacional..... 1177

- 6) **Levantamiento de la sesión..... 1211**

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

“Montevideo, 25 de febrero de 2014.

La COMISIÓN PERMANENTE se reunirá el próximo jueves 27 de febrero, a la hora 10:00, en régimen de Comisión General, a los efectos de recibir al señor Ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker a fin de informar acerca de los resultados de los programas principales del Ministerio a su cargo, la evaluación de los mismos, sus costos y los impactos esperados en todo el territorio nacional.

José Pedro Montero
Secretario

Hugo Rodríguez Filippini
Secretario”.

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores **Carlos Moreira** y **Alfredo Solari**, y los señores Representantes **Pablo Abdala**, **Alberto Casas**, **Orquídea Minetti**, **Daniel Radío**, **Víctor Semproni**, **Daisy Tourné** y **Jorge Orrico**.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

“El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 168 de la Constitución de la República, para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.

–A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE LAS VENIAS DE DESTITUCIÓN.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor

Legislador Ope Pasquet, relacionado con el efectivo cumplimiento por parte de la República Federativa del Brasil de una Resolución de la Unasur, por la cual se dispuso que los buques que enarbolan el pabellón británico de las islas Malvinas no tengan acceso a los puertos de los Estados Partes de la Unasur.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR LEGISLADOR PASQUET”.

- 4) **RETRASO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.**

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra a la Media Hora Previa.

Tiene la palabra el señor Legislador Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: hace pocas jornadas, en el ámbito de esta misma Comisión Permanente, reclamamos al Ministerio de Salud Pública que cumpliera con suministrar y hacer pública la información con relación a la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, dado que ya se había cumplido el segundo semestre de vigencia de esa norma sin que el Ministerio proporcionara la correspondiente información oficial

Esta omisión se superó el pasado lunes, cuando el Ministerio, efectivamente, dio la información correspondiente al segundo semestre. Por lo tanto, queremos dar por concluido este capítulo de esta historia –que, por supuesto, es larga y antigua y que, seguramente, se prolongará hacia el futuro, porque todos sabemos del tema que estamos hablando– diciendo que nos satisface que el Ministerio haya proporcionado esta información, que, obviamente, merece algunos comentarios y algunas reflexiones de nuestra parte.

En primer lugar, con relación a la obligación de cualquier organismo público de suministrar información que es de naturaleza pública, reitero que el Ministerio tiene tres meses de retraso en el suministro de la información correspondiente al segundo semestre. El Ministerio de Salud Pública deberá ajustar su

conducta en este aspecto porque, obviamente, es la única fuente fidedigna y oficial de información con relación a un tema tan delicado que, seguramente, mantiene en vilo y expectantes a muchos actores de la sociedad. Por lo tanto, debe ser cuidadoso y cumplidor en cuanto a la periodicidad con que proporciona la información.

En segundo término, en lo que tiene que ver con los datos propiamente dichos, las cifras del segundo semestre parecen indicar lo que después veremos si es una tendencia o no, en cuanto a un incremento en la práctica de los abortos legales de un 27 % con relación al primer semestre de vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como sugerimos hace unos instantes, creo que es aventurado sacar conclusiones anticipadas; en todo caso, es un indicio, y veremos si las próximas mediciones y los próximos semestres lo confirman como una tendencia.

El señor Subsecretario de Salud Pública ensayó una interpretación en el sentido de que, cuando se producen procesos de legalización de la práctica del aborto, es habitual que ocurra una suerte de pico inicial para que después las cifras se estabilicen y aun inicien una tendencia descendente. Esta no es la experiencia internacional; veremos si Uruguay recorre el mismo camino, pero, en todos los países del mundo donde el aborto se legalizó –Europa y los Estados Unidos–, la información indica que ha habido un incremento progresivo, paulatino, sostenido e ininterrumpido del número de abortos. Los Estados Unidos son un buen ejemplo: prácticamente, se duplicaron en el curso de cuatro décadas, pero, reitero, en forma progresiva y continua. En España, se practicaron 70.000 abortos en 2001 y más de 130.000 en 2010. Por tanto, veremos si Uruguay sigue o no la tendencia internacional.

Los números que suministró el Ministerio señalan 6.600 abortos practicados en los primeros dos semestres a partir de la vigencia de la ley. Por otro lado, la cifra que históricamente se manejó –como una especie de cifra mágica– de 33.000 abortos por año, es absolutamente falsa. Claramente, era una cifra antojadiza, que no respondía a la realidad, sino, seguramente, a la intencionalidad de determinados sectores o grupos, a los que no vamos a aludir, porque no es posible hacerlo en la Media Hora Previa. Por tanto, las cifras oficiales son lo suficientemente bajas como para concluir que aquella cifra no era correcta. Asimismo, las cifras oficiales son lo suficientemente bajas como para advertir, o por lo menos, sospechar, que lejos está de haberse superado o resuelto satisfactoriamente la clandestinidad.

Más allá del debate político y del debate parlamentario, y luego del proceso de recolección de cifras, con el que se intentó impulsar un referéndum, creo que

nuestro deber no es solo hacer un seguimiento a la aplicación de la ley, sino, sobre todo, procurar que esta cumpla la finalidad principal que dijo perseguir en el sentido de dignificar a la mujer y proporcionarle servicios adecuados en materia de salud. En tal sentido, el silencio y la reticencia del Ministerio de Salud Pública nos llevan a pensar que, seguramente, estamos muy lejos de cumplir ese objetivo, lo que seguramente será motivo de algún otro debate. Será un debate permanente que tendremos que dar en nuestra sociedad.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública y al Instituto de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

–7 en 7. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

Ha finalizado la Media Hora Previa.

SEÑOR SEMPRONI.- Pido la palabra para presentar una moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR SEMPRONI.- Solicito un intermedio de quince minutos antes de que ingrese a Sala el señor Ministro Olesker, quien ha sido convocado para el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

–7 en 7. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

(Es la hora 10 y 17).

5) COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMISTA DANIEL OLESKER, PARA QUE INFORME ACERCA DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES DEL MINISTERIO A SU CARGO, LA EVALUACIÓN DE LOS MISMOS, SUS COSTOS Y LOS IMPACTOS ESPERADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

(Vueltos a Sala).

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la sesión.

(Es la hora 10 y 36).

–La Mesa invita a pasar a Sala al señor Ministro y al señor Subsecretario de Desarrollo Social.

(Ingresan a Sala el señor Ministro y el señor Subsecretario de Desarrollo Social).

–La Mesa saluda la presencia del señor Ministro y del señor Subsecretario de Desarrollo Social.

Seguramente, el señor Ministro solicitará autorización para que ingrese algún asesor.

SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL.- Buenos días a todos, y gracias por recibirnos.

Sí; como vamos a presentar el balance –que acabamos de publicar– de dos años de gestión de los programas del Ministerio, solicitamos autorización para que ingresen el Director de Programas, Francisco Terra, el Director de Evaluación y Monitoreo, autor de este informe, Juan Pablo Labat, y la Directora de Coordinación Interdireccional, coordinadora general de todo el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, Mariana Drago.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

–7 en 7: **Afirmativa**. UNANIMIDAD.

(Ingresan a Sala los asesores del Ministerio de Desarrollo Social).

–El señor Ministro de Desarrollo Social ha sido convocado a instancias de la señora Legisladora Minetti para que informe acerca de los resultados de los principales programas del Ministerio a su cargo, su evaluación, sus costos y los impactos esperados en todo el territorio nacional.

Tiene la palabra la señora Legisladora Minetti.

SEÑORA MINETTI.- Señor Presidente: en primer lugar, saludo y agradezco la presencia del señor Ministro, del señor Subsecretario y de su equipo.

Como es de público conocimiento, el Frente Amplio ha convocado al señor Ministro, moción que fue votada por unanimidad.

La convocatoria al señor Ministro de Desarrollo Social debe considerarse como una puesta a punto de la estrategia que tiene el Gobierno para el futuro. Dicha estrategia está enmarcada en la visión de país,

que surgió de los acuerdos con diferentes actores sociales y que se expresan en la Concertación Nacional para el Desarrollo. Desde el punto de vista político, se encuadran en la visión y el compromiso de luchar por un país productivo, incluyente y justo, pero también democrático, aspectos todos desarrollados en el programa del Frente Amplio.

Desde que asumimos el Gobierno, nos hemos preocupado por garantizar que esos principios rectores se desarrollen en forma paulatina y ordenada, dando al pueblo la seguridad de que los objetivos se cumplen y demostrando que un país justo, inclusivo y democrático, es posible.

La Ley n.º 17.866, de 21 de marzo de 2005, que creó el Ministerio de Desarrollo Social, no podía por su propio imperio, materializar los cimientos de la misión que la misma ley le confiere en pos de los ideales. En 2006, se sientan las bases de un plan estratégico, que tiene como objetivo colaborar de manera decisiva en el desarrollo social de la República, estableciendo la institucionalidad y las prácticas necesarias. Así comienza la descentralización, estableciéndose las Mesas Interinstitucionales en las que el Gobierno nacional y los Gobiernos departamentales fijan las prioridades del territorio, a partir de la orientación que determina el Gabinete Social y el Consejo Nacional de Política Social.

Existen tres tipos de políticas sociales: de trabajo, de servicio y asistenciales. Las políticas asistenciales son acciones de transferencia de bienes y servicios a aquellos sectores de la sociedad a los que las condiciones y expectativas de las políticas de trabajo y de servicio no lograron asegurar su supervivencia.

En realidad, creo que un país se ve obligado a recurrir a políticas asistenciales porque las políticas de trabajo y de servicio no fueron aplicadas.

Desde 2005, desde la llegada al Gobierno de nuestra fuerza política, Uruguay está abocado a la realización de cambios muy profundos, que se reflejan en la implementación de políticas públicas que permiten vislumbrar una nueva concepción de pobreza y de los factores psicosociales. Las políticas públicas son actividades llevadas a cabo por las instituciones gubernamentales, con el objetivo de lograr determinada influencia en las personas. Las políticas públicas son medidas que se construyen en forma de programas y acción, y se desarrollan en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico. No se hacen de manera aislada, sino formando parte de un plan con un fin específico que se considere necesario y pertinente, a fin de que puedan colaborar con los diferentes actores de la sociedad.

El Ministerio articula y coordina la gestión de todos aquellos organismos que tienen un papel específico, dando cuenta de la participación de importantes políticas públicas, de manera de hacer que estas cumplan con su objetivo.

Es importante que tengamos claro el concepto de política social que estamos impulsando. ¿Por qué digo esto? Porque la política social actual no es la misma que la del año 2005. Los problemas no son los mismos; tampoco la población es la misma.

Las políticas sociales están basadas en principios que la rigen. De una forma u otra, su desarrollo permite incluir a los ciudadanos, dando cohesión social.

Estas políticas prevén dos formas de financiación para acceder al servicio: el ciudadano puede pagar el servicio directamente en el momento de acceder a él o bien contribuir de otra forma, mediante una tasa, un impuesto o una contribución a la seguridad social. Creo que la segunda forma es la ideal, la adecuada porque, de esa manera, el ciudadano no accederá a la prestación del servicio por lo que paga, sino que podrá hacerlo mediante esa contribución de acuerdo con un estudio que tendrá en cuenta su núcleo familiar, su edad y sexo, la forma en que vive y su salud.

Las políticas sociales deben ser universales y en ellas debe existir la focalización. Es universal porque está pensada para favorecer a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué digo que deben incluir la focalización? Porque el beneficio que se da a la sociedad a través de una política social tiene que ser en forma gradual.

Para llevar a cabo una política social es imprescindible la participación del Gobierno nacional y de los Gobiernos departamentales, que son los que realmente conocen la realidad de sus habitantes y sus prioridades. Su trabajo en coordinación con el Gobierno nacional permitirá hacer conocer qué se necesita, cuál es la prioridad que tiene cada departamento.

Se creó y se puso en funcionamiento el Sistema Integrado de Información del Área Social. Es muy importante tener en cuenta esto, porque no es de mucho conocimiento; tal vez el Ministro desarrolle este tema. Este Sistema Integrado de Información del Área Social recoge la información de todos los organismos que llevan a cabo las políticas sociales del Gobierno; existe una ventanilla única de información, en la que se conoce lo que se da a todos los beneficiarios.

Por razones obvias, la temática que desarrolla este Ministerio es de contenido social. Los aspectos a tratar son muy sensibles y nos atraviesan a todos.

Una de las tantas responsabilidades de nuestro Gobierno, a partir del año 2005, ha sido plasmar acciones concretas y pensar, entre todos, políticas que apunten a la inclusión social.

Es muy importante que un país invierta en políticas de inclusión social, porque contribuyen a favorecer a toda la sociedad.

Además de invertir en políticas sociales, debemos evaluar permanentemente lo instrumentado en ellas, para ver si es conveniente su continuidad e, inclusive, para tener la posibilidad de corregir lo que creamos del caso. Lo más importante es dar permanencia a los logros conquistados, para que sean sustentables en el tiempo y no dependan del Gobierno de turno.

Comenzamos por generar espacios de cohesión social, primero, a partir de los programas de emergencia, siguiendo con los de equidad y estableciendo otros programas que hoy se están llevando a cabo.

El primer plan que este Ministerio desarrolló fue el Plan de Atención Nacional de Emergencia Social, el Panes, más conocido como Plan de Emergencia, que ha sido muy criticado; creo que no se tiene información suficiente en cuanto a lo que ha significado.

Como dije anteriormente, en el año 2005 nuestro Gobierno se vio obligado a implementar un Plan de Emergencia, porque la sociedad en su conjunto, durante décadas, careció de políticas sociales que son realmente necesarias.

¿Qué atendió este Plan de Emergencia? Atendió a los ciudadanos más vulnerables, aquellos que durante muchas décadas habían sido sometidos a la exclusión. Este plan formó parte de un gran proyecto nacional que tiene como objetivo una sociedad mucho más justa, más equitativa, atendiendo la indigencia y la extrema pobreza. Por suerte, hoy la pobreza no se determina solamente por el ingreso económico de un ciudadano, sino por la falta de facultades de ese ciudadano por la no aplicación de buenas políticas sociales.

En el año 2005, una gran parte de nuestra población estaba en una crisis total –a esta altura podemos decir que lo hemos estado superando–, dado que no tenía servicios de salud, no tenía una vivienda digna, los niños no asistían a la escuela porque no había una cultura al respecto. Estamos superando esta situación. Luego daremos los números correspondientes; seguramente, el señor Ministro y su equipo se referirán a esto con mayor claridad.

En realidad, había gente que vivía inmersa en la violencia familiar, inclusive, en la violencia social y

vecinal. Tuvimos que hacernos cargo de esa situación para sacarlos de ese hábitat.

En el año 2006 se registró la mayor cantidad de hogares incluidos en el Plan de Emergencia. Se alcanzó una cobertura de 91.000 hogares, que abarcaban a casi 400.000 uruguayas y uruguayos. Hay una serie de puntos en los que se dividió el Panes, que dieron consistencia a este programa. Ese fue el arranque de un proceso que continúa a otro nivel y que hoy garantiza que podamos aplicar otros programas.

Podemos mencionar el Ingreso Ciudadano, que tenía transparencia monetaria, y que estaba dirigido a jefes y jefas de hogar que asumían el compromiso de ejercer sus propios derechos, de realizar los controles médicos de su grupo familiar y asegurar que niñas, niños y adolescentes estuvieran incluidos en el sistema educativo.

Según los números que manejo, en 2006 los beneficiarios del Panes eran 76.000 hogares, que involucraban a 327.000 personas: 59 % eran menores de dieciocho años y, lamentablemente, 27 % estaban desempleadas. Hoy, fruto de la mejora en las condiciones de vida, no existen hogares que estén recibiendo este beneficio.

Hubo que aplicar la emergencia sanitaria para garantizar asistencia y cobertura médica a aquellas personas con mayor vulnerabilidad social y con dificultades culturales, geográficas y económicas.

También existió el Plan Alimentario Nacional, el apoyo socioeducativo en zonas de contexto sociocultural crítico y el mejoramiento del hábitat. Hoy por hoy, podemos ver los logros conseguidos con estos programas. Actualmente, las personas son conscientes de que tienen derecho a una vivienda digna, y se les dio la oportunidad por medio de diferentes programas –por ejemplo, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de la Agencia Nacional de Vivienda y del Plan Juntos– de que participaran en su construcción en lugares que, a veces –contado por los propios protagonistas–, eran pozos donde se descargaban los residuos: las familias rellenaron esos pozos y construyeron sus casas.

Dentro del Plan de Emergencia están el Plan Construyendo Rutas de Salida, el Programa Trabajo por Uruguay, el Proyecto de Opción Productiva y Uruguay Clasifica.

Se ha dicho que la política social debe considerar el ciclo de vida, pues importa cada vez más en la definición de una política social, y así debe ser. Cuando aplicamos una política social, no podemos detenernos solamente en los números, sino que debemos mirar

los problemas que quedan pendientes después de aplicarla.

Cuando se avanza en la inclusión, lamentablemente, la exclusión se hace mucho más significativa. Cualquier sociedad que avanza en un programa de inclusión social siempre va a dejar personas rezagadas y, precisamente, ellas forman parte del sector más vulnerable de la población.

En los últimos años el concepto de pobreza y desarrollo ha ido evolucionando. Ya no se hace énfasis –como dije anteriormente– únicamente en el ingreso económico. La pobreza deja de ser sinónimo de bajos ingresos y se toma en cuenta el debilitamiento de varias capacidades humanas fundamentales. La pobreza humana refiere a la falta de medios para alcanzar estas capacidades.

Por supuesto, el señor Ministro y su equipo van a desarrollar los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Con todo respeto, quiero mencionar algunos de ellos; por ejemplo, la tarjeta Uruguay Social y las Asignaciones Familiares, que tienen como objetivo apoyar a la población más vulnerable y brindar los estímulos necesarios para la inclusión laboral y educativa de sus familias.

La focalización es uno de los ejes centrales de la estrategia de nuestro Gobierno y trajo como consecuencia que la población que hoy es beneficiaria de esa tarjeta sea menor que hace un tiempo, puesto que mejoró la calidad de vida de esas familias que recibían el beneficio. No obstante, se acrecentó el número de tarjetas para personas que todavía realmente lo necesitan.

El 20 % de los hogares de menores ingresos –algo de lo cual el señor Ministro también va a hablar– recibe transferencias: el porcentaje era del 67,5 % en 2006 y del 77,8 % en 2012. O sea que tres de cuatro hogares fueron beneficiarios en 2012.

La tasa de empleo del sector más pobre de la población –que es un 20 %– creció del 47 % al 50 %, y la tasa de desempleo cayó de 23 % a 14 %. En 2012, el 57 % de los ingresos de estas familias derivó de sus trabajos. En el 5 % del sector más pobre de nuestra sociedad la tasa de empleo pasa de 41 % en 2006 a 45 % en 2012; y en los mismos años, la tasa de desempleo baja de 30 % a 19 %.

El fuerte descenso de la pobreza, de 33,9 % en 2006 a 12,4 % en 2012 y la caída de la indigencia en los últimos años, que era de 2,6 % en 2006 y que en 2012 llevamos a 0,5 %, no solo fue producto de las transferencias a los hogares más vulnerables, sino también del incremento de los niveles de empleo, de los ingresos laborales, de la educación, del descenso

de la tasa de desempleo y el de la informalidad laboral.

Dentro de los programas educativos encontramos el Plan de Formación Profesional Básica, cuyos cursos están destinados a la formación profesional de jóvenes de quince años en adelante. En su transcurso, el estudiante adquiere una cultura general y completa, y puede desarrollar diversas capacidades profesionales. Este proceso educativo otorga al joven la posibilidad de optar por cursos superiores de enseñanza, ya que equivale a formación media básica.

Otros de los programas socioeducativos es Compromiso Educativo, que tiene como objetivo general ayudar a enriquecer y consolidar los programas educativos existentes, mejorando sus condiciones para que los estudiantes permanezcan y puedan potenciar su recorrido en el sistema educativo público, permitiendo que completen el segundo ciclo de enseñanza media. El Programa Compromiso Educativo cuenta con un articulador pedagógico, espacios de referencia, acuerdo con familias, estudiantes y becas.

Dentro de los programas socioculturales se encuentra Uruguay Trabaja, que tiene el objetivo de crear mayores oportunidades de inserción social, procesos de integración, optimizando la calidad y empleo de los participantes. Lo anteriormente mencionado se ejecuta por intermedio de trabajos comunitarios de carácter transitorio y capacitando a los participantes. La población a la cual está destinado este programa abarca a personas de entre dieciocho y sesenta y cinco años de edad.

Otro de los objetivos es que todos los participantes logren tener la documentación vigente, así como que accedan a la salud odontológica y oftalmológica. Una de las metas del programa es acreditar una inserción laboral formal, tratando de llegar al 5 % de los participantes.

A mi modo de ver, lo más importante y gratificante del programa Uruguay Trabaja es que toda persona construye su proyecto individual. Hay un ejemplo de personas discapacitadas que llevaron adelante su proyecto y formaron una cooperativa y, hoy por hoy, están haciendo el curso de capacitación en UTU e ingresaron en la bolsa de trabajo del Sunca. Otro ejemplo en este sentido nos lo dio una habitante de nuestro departamento de Canelones, quien nos contó que cuando era chica, su padre le decía que debía aprender su oficio de zapatero, porque algún día podría necesitar de él. Ella jamás le dio importancia a lo que le decía su padre. Cuando tuvo que ingresar por razones de la vida al programa Uruguay Trabaja, esa canaria joven, jefa de hogar, recordó lo que su padre le decía y llevó esa inquietud a este programa. Actualmente, creó

una empresa, como es debido, hace zapatos y vende en el departamento.

En diciembre de 2011, el 67 % de las cooperativas sociales tenía 1.370 participantes, mientras que en diciembre de 2012 esa cifra aumentó a 1.709.

Otro de los programas refiere al Desarrollo Local. Este programa intenta fomentar una cultura emprendedora, promoviendo la participación local; lo hace financiando maquinarias y herramientas, mejorando instalaciones e infraestructuras, financiando materias primas, insumos e, inclusive, realizando cursos de capacitación.

En el año 2012 se logra llegar casi al doble de emprendimientos en comparación con 2011; cabe destacar que en el 45 % de los emprendimientos se produjo una mejora de los ingresos.

Por otro lado, el Monotributo Social del Mides se empezó a implementar en el año 2012, y constituye un instrumento para la formalización de emprendimientos cuyos dueños se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Se trata de un tributo único que pagan las personas que tienen comercios de bienes y servicios y cuyos hogares están por debajo de la línea de pobreza o en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Social también implementó los programas Cercanías y Jóvenes en Red, que son prioritarios.

El programa Cercanías supone una estrategia nacional de fortalecimiento de las capacidades familiares; se trata de una iniciativa de muchas instituciones, destinada a la atención prioritaria de familias en contexto de extrema pobreza. Las instituciones que participan en este programa son el Mides, el INAU, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ASSE, la ANEP, el Codicén, el BPS y los Ministerios de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social.

Por otro lado, el Mides implementó un programa para sesenta empresarias. En este sentido, trató de cambiar la gestión de políticas, ya que se pasó de una acción individual de los problemas a un trabajo integral con las familias, como sujeto de derecho. Lo que se buscó fue efectivizar el acceso prioritario a las prestaciones sociales con la articulación de políticas, bienes y servicios. En ese sentido, se brinda a las familias acompañamiento técnico, utilizando dispositivos de proximidad, articulados a la red local.

Las familias derivadas al programa son 3.591; en octubre de 2013 los equipos atendieron a 1.378 familias, es decir, más de ocho mil personas.

En realidad, el cambio en la intervención se evaluó como muy positivo, ya que en lugar de atender solo al individuo se comenzó a pensar en la familia como un todo, como un sistema. Además, se evaluaron otros aspectos en forma positiva, y la atención se llevó a cabo en su contexto y por un largo período. Sin duda, la interinstitucionalidad también tuvo una fuerte valoración.

El punto más fuerte de este programa está en su diseño, porque fue realizado en base a las necesidades, conocimientos y experiencia de los operadores territoriales; como dije anteriormente, en este sentido es medular la coordinación entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales.

Por otra parte, el programa Jóvenes en Red comienza a implementarse en el año 2012, luego de visualizarse un alto porcentaje de adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan; esta propuesta está dirigida a adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años que no estudian, que no han culminado el Ciclo Básico y que pertenecen a hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza y no tienen empleo formal.

Jóvenes en Red es un programa interinstitucional coordinado por el Mides, que busca promover el ejercicio de los derechos de los jóvenes desvinculados del sistema educativo y del mercado formal de trabajo, con un abordaje integral, territorial y en comunidad.

En ese sentido, en el año 2004 se desarrollaron acciones en forma individual con la gran mayoría de los beneficiarios; con 1980 beneficiarios se realizaron actividades socioculturales y paseos recreativos y culturales, como así también actividades deportivas y artísticas. Además, se brindaron beneficios económicos, como el acceso a becas de transporte y la tarjeta Cultural; asimismo, se ayudó con la tramitación de la documentación básica a más de mil jóvenes.

¿Qué es el Sistema de Bonos de Cuidado? Se trata de un proyecto abocado a los cuidados de la primera infancia en el marco del sistema de cuidados. Su objetivo es llevar a cabo acciones que promuevan el desarrollo y la inclusión de niños y niñas, y el acceso al estudio por parte de sus madres, padres o adultos responsables de su cuidado.

Este programa también está abocado a apoyar los programas prioritarios en el cumplimiento cabal de sus cometidos, promoviendo la atención integral de las familias que forman parte de su población mediante la inserción de niños y niñas de entre cero y tres años de edad en centros educativos privados. De esta forma se logró fomentar y garantizar la atención de calidad para niños y niñas de entre cuarenta y cinco días a tres años. También se fomentó la participación de madres, padres o adultos referentes, a

través de programas socioeducativos y sociolaborales. El programa está destinado a los hogares beneficiarios de los programas sociales prioritarios, que tienen niños y niñas menores de cuatro años. Este subsidio se hará efectivo en caso de no existir la posibilidad de acceder a un centro público debido a que los cupos estén cubiertos o no se cuente con cobertura territorial, lo que ocurre con frecuencia en zonas rurales.

Cada programa opera de forma distinta para lograr los objetivos. En el caso de Jóvenes en Red, se busca colaborar con los jóvenes que están abocados al cuidado de sus hijos, hijas, hermanos o hermanas, quienes al contar con una solución para el cuidado de esos niños pueden ocuparse de su inserción educativa o laboral.

El apoyo a la primera infancia constituye una ayuda para las madres, padres o quienes tengan a cargo la tarea del cuidado de los niños, favoreciendo el desarrollo de niñas y niños, que es el objetivo central del programa. En cuanto al programa Cercanías, constituye una forma de fortalecer las capacidades familiares y promover el desarrollo y estimulación de esos niños.

También quisiera referirme a la trayectoria educativa y laboral. En este programa los técnicos acompañaron a 1.281 beneficiarios en procesos para poder vincularse nuevamente en la educación, llevando a cabo actividades de inscripción en los diferentes centros de estudio. Como dije anteriormente, se busca que los jóvenes finalicen el Ciclo Básico.

Asimismo, se ejecutaron operaciones para que 664 jóvenes retomaran o se inscribieran en Ciclo Básico, y se trabajó para que 125 jóvenes comenzaran a asistir a cursos de acreditación escolar; además, más de quinientos jóvenes se inscribieron en otras capacitaciones.

Entre los jóvenes que se inscribieron en Ciclo Básico, podemos decir que casi 250 lo hicieron en un liceo y 323 en centros con formación profesional básica. Asimismo, podemos comentar que el porcentaje de deserción entre estos jóvenes varía entre el 22 % y el 34 %.

Por otro lado, la gran mayoría de los jóvenes que se inscribieron en otras capacitaciones –más de 500– hicieron cursos básicos de UTU, y el porcentaje de deserción de este grupo es del 40 %.

En lo que respecta al segundo objetivo, que es el de la inserción laboral, los operadores acompañaron a casi 600 jóvenes. Al respecto, podemos decir que casi 400 jóvenes ingresaron al mercado formal, 225 lo hicieron al mercado informal, y 10 integraron emprendimientos juveniles. En cuanto a la deserción,

se observa que de 99 jóvenes que habían ingresado al mercado formal, desistió el 26 %; de los 74 que trabajaban en la actividad informal, desistió el 33 %, así como la mitad de los que se habían abocado a emprendimientos juveniles.

Se trabajó con un total de 1.582 beneficiarios con respecto a su inserción laboral y educativa; el desglose de esa cifra muestra que solo se acompañó en su inserción laboral a 301 de esos jóvenes, en su inserción educativa a 1.013 y en ambos objetivos a 268.

Por otro lado, en setiembre de 2007 se creó el Programa Nacional de Discapacidad, el Pronadis. Dicho programa está destinado a desarrollar, coordinar y ejecutar políticas focalizadas de discapacidad y tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en esa situación.

En la composición de este programa voy a destacar algunos puntos, como el asesoramiento jurídico y legal gratuito, el laboratorio de ortopedia técnica, creado a través de un convenio con el Gobierno cubano, el Centro de Rehabilitación para personas ciegas, Tiburcio Cachón, que es un centro de rehabilitación integral para personas ciegas o con baja visión.

El programa de atención Visitas apunta a la elaboración y búsqueda de tácticas de atención para situaciones de discapacidad y dependencia, que se ocupa de las necesidades de las personas desde un enfoque integral.

En cuanto al programa Barriendo Barreras, podemos decir que se llevan a cabo jornadas de sensibilización, destinadas a colaborar con un servicio de salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad y sus familias. En ese sentido, se trabaja con agentes comunitarios, organizaciones y personas involucradas con la temática a fin de desarrollar herramientas que promuevan la inclusión social, la autonomía y el fortalecimiento de esta población, promoviendo sus derechos humanos. Desde el año 2012 –a lo mejor, después, el Ministro me corrige–, se han realizado diez jornadas, que involucraron a casi 250 participantes.

Otro de los puntos a destacar tiene que ver con los promotores y promotoras de inclusión, generándose instancias de sensibilización y visibilización de la discapacidad.

Nuestro país ha experimentado resultados positivos en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Rápidamente, quiero citar algunas cifras. En 2004, la pobreza alcanza el 39,6 % de la población y en 2012 desciende al 12,4 %. Por otra parte, en 2004, la pobreza extrema se encontraba en el 4,5 %, experimentando una reducción, en 2012, al 0,5 %. Las

transferencias monetarias fueron de suma importancia para la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza, mejorando los ingresos de estas familias, aproximándolas a salir de la situación de pobreza.

El gasto social se multiplicó por dos en términos reales, sacándolo de la marginalidad absoluta en que estaba, creando puertas de entrada a la inclusión social y fortaleciendo a los prestadores universales: salud, educación, etcétera, que son los agentes que desarrollan y continúan el camino de la integración social.

La tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares establecen que el titular del beneficio sea preferentemente mujer, argumentando que las mujeres realizan una mejor administración del dinero en los hogares. Esto conlleva a elevar la autoestima de las mujeres y ganar territorios en la vida social; no es cuestión de género, pero las mujeres han sido muy relegadas en nuestro país.

Es necesario destacar los programas que actúan directamente sobre el núcleo más estructural de la pobreza, demostrando que el vínculo directo y cercano beneficia los procesos de inclusión social, creando expectativas a la población que fue excluida y fortaleciéndola, a veces, a largo plazo.

Me quiero referir a un tema muy sensible, como la niñez. El Ministerio ha desarrollado políticas sociales en beneficio de esta población.

En el siglo pasado se asistió a un progresivo y profundo proceso de reconceptualización, protección y valorización de los niños, así como también de su relación con la familia, la sociedad y el Estado, con sus derechos y obligaciones. En 1990, entró en vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño, y es el último antecedente significativo en este proceso de cambio gradual que ha habido sobre la infancia en el marco de la lucha por la protección de los derechos humanos.

Como plantea Cillero Bruñol, uno de los grandes logros de esta lucha, en el siglo XX, ha sido reconocer que todos los individuos, incluidos los niños, gozan de derechos agenciados para los seres humanos y que será deber de los Estados garantizar su efectiva protección de forma igualitaria, con un respaldo jurídico correspondiente y específico para cada grupo de personas.

En la Convención sobre los Derechos del Niño se desarrolla un conjunto de disposiciones que buscan reconocer y garantizar el derecho del niño a sobrevivir, a desarrollarse y a participar activamente en la vida social, a todos por igual. Todos los niños tienen

derecho a no ser discriminados en sus derechos, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, a través de políticas de protección y compensación, principalmente en la infancia que se encuentra en situación de mayor grado de vulnerabilidad, con el fin de asegurar que el niño tenga acceso a sus derechos. Los niños son nuestro futuro, señor Presidente. Debemos contenerlos y protegerlos, formarlos para que se conviertan en seres pensantes, en seres inteligentes y, sobre todo, en seres libres. Por eso, hay que invertir en proyectos sociales que conjuguen niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, para poder lograr una sociedad mucho más digna.

Lo que ocurre con los niños y niñas en sus primeros años de vida tiene una importancia fundamental, tanto para su bienestar inmediato como para su futuro. Si en los primeros años de su vida un niño recibe un mejor comienzo, probablemente crecerá sano, podrá desarrollar capacidades verbales y de aprendizaje, asistirá a la escuela y llevará una vida productiva y gratificante, pero sabemos que, lamentablemente, existen millones de niños y niñas, alrededor del mundo, a los cuales les fue negado este derecho de alcanzar todas sus posibilidades.

Un lactante comienza una extraordinaria carrera: de indefenso recién nacido se va a transformar en niño activo y a corta edad puede estar preparado para ir a estudiar. Lamentablemente, muchos carecen de ese amor, de la atención, de la crianza, de la salud, de la protección para poder sobrevivir, crecer y desarrollarse. Obvios son los datos, señor Presidente, de Unicef. Todo esto lleva a que muchos mueran y otros no puedan desarrollar su potencial, debido a que ellos o sus cuidadores carecen de las condiciones básicas necesarias para sobrevivir y prosperar.

Como dije anteriormente, señor Presidente, los niños son el futuro y el principal desafío del presente. La experiencia positiva en esta edad está asociada a efectos altamente favorables, a las oportunidades que el niño y la niña tengan de alcanzar un desarrollo integral. La cercanía y el apego con los adultos referentes, los cuidados afectuosos, el ambiente de armonía, de dedicación y de juego, la nutrición y la salud son aspectos fundamentales para favorecer el desarrollo en los primeros años de vida, donde los cambios son constantes y rápidos. Estos cambios transcurren como ventanas que se abren y se cierran y, por lo tanto, aquello que no ocurre en el momento correspondiente habrá perdido su oportunidad. Estas modificaciones pueden ser positivas en la medida en que la integración con el ambiente ocurre en forma favorable o negativas si se dan a través de interacción desfavorable. La noción de oportunidad es central para comprender la importancia de este período. Todo lo que vemos después, como síntoma, tiene mucha raíz en la inequidad durante la primera infancia:

madres embarazadas no suficientemente controladas o alimentadas, con partos no bien evaluados y sin seguimiento. Lo mismo sucede con el recién nacido. Todo esto está jugando y definiendo el futuro. Desde el presente que son los niños y desde el presente activo de los adultos y los adultos mayores se construye cultura, identidad, desarrollo local, potencialidades y, aunque a veces no se vea en lo cotidiano, la permanencia va a generar grandes oportunidades a una sociedad que, sin duda, tiene que ser más inclusiva desde el primero hasta el último día.

En 2004, el porcentaje de pobreza infantil alcanzó al 56,5 % de los niños y la indigencia pasó, entre 1998 y 2004, de 4,4 % a 9,3 %. Estos son datos proporcionados por Unicef en 2007. El Estado uruguayo, a raíz de estudios realizados sobre su población, entabla conversaciones entre distintos actores políticos, gubernamentales y de la sociedad civil, a lo largo y ancho del país, cuyos aportes fueron muy importantes. Uno de sus resultados fue la visualización de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia –ENIA–, creada para 2010-2030. Con esto, el Ministerio ha hecho un trabajo excepcional, proyectándonos en el tiempo.

Durante la puesta en práctica de esta estrategia, se vislumbró la necesidad de fortalecer programas que dirigieran su mirada a familias con mujeres embarazadas y primera infancia.

Además, quiero destacar un programa, por ser canaria –en este recinto están presentes Legisladores canarios de otros partidos–, que se llevó a cabo en mi departamento. Me refiero a Canelones Crece Contigo, una estrategia canaria de fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Luego, la Presidencia resolvió que ese programa fuera parte de un programa nacional, que actualmente se llama Uruguay Crece Contigo.

Este programa nació a partir de la preocupación por la disminución de la población infantil en Canelones, el departamento con menor crecimiento infantil del país en esos momentos. Al inicio de este programa, el 70 % de los hogares con niños de este sector social se presentaba en situación de pobreza y pobreza extrema. Esta estadística se revela a partir de una encuesta sobre anemia, llevada a cabo en el departamento de Canelones, en 2006. Fue realizada con una mirada hacia los objetivos del milenio, que son comprendidos dentro de la ENIA.

Como dije, el programa fue impulsado desde la Presidencia de la República, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el apoyo del Mides, del Ministerio de Salud Pública, de ASSE, del INAU y de las Intendencias Municipales.

El objetivo del programa Canelones Crece Contigo fue acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños y niñas desde su gestación. Más específicamente, el objetivo consiste en implementar un programa de salud y de educación, dirigido a las familias con niños menores de cuatro años con riesgo nutricional.

Este proyecto apoyó la implementación de un programa de salud y educación que garantizó el acceso a servicios de salud de todos los niños, niñas y mujeres, el desarrollo de espacios públicos orientados a la promoción del desarrollo infantil y el fortalecimiento productivo a nivel de las familias rurales y la legitimación cultural. Recordemos que en aquellos momentos, las familias rurales atravesaban una exclusión total en el país, y también –lo puedo afirmar– en mi departamento, Canelones.

Por eso, en el año 2012, la Presidencia de la República resolvió que este programa pasara a ser una propuesta nacional.

Voy a citar algo que hace muchos años mi madre solía decirme. Ella me decía que estaba mal preguntar a un niño qué quería ser cuando fuera grande. La pregunta correcta sería: ¿Qué querés hacer cuando seas grande? Ella decía que con seguridad, ese niño iba a contestar –o si no podía hacerlo por no tener la madurez suficiente lo iba a pensar y sentir– que lo que quería hacer cuando fuera grande era vivir y ser feliz.

Por todo lo anteriormente dicho, es necesario seguir construyendo una sociedad con memoria e identidad, para lograr un país más justo y con mayor equidad social.

Podemos decir que las políticas sociales que hemos desarrollado en estos últimos ocho años apuntan a proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad, en pos de la igualdad de oportunidades.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Ministro de Desarrollo Social.

SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL.- Señor Presidente: vuelvo a agradecer la invitación.

Como dije cuando solicité el ingreso de los tres compañeros Directores, de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, de Programas y de la Coordinación Interdireccional, en el pasado mes de diciembre culminamos un proceso de evaluación de las políticas sociales realizadas en los últimos dos años. Hubo otro en 2011. Ya es una tradición que cada dos años el Ministerio realice un informe de evaluación,

recopilado en un documento de unas quinientas páginas, que recién ha salido de imprenta para que una vez culminada esta sesión cada Legislador de la Comisión Permanente pueda quedarse con un ejemplar.

Como no pretendemos utilizar el tiempo para analizar las quinientas páginas, hicimos una síntesis que vamos a proyectar, que fundamentalmente incluye seis puntos que luego vamos a desarrollar. Algunos de ellos recogen información que la Legisladora informante ha mencionado, pero obviamente están disponibles en las páginas web del Mides y de la Presidencia para todos los que deseen acceder a ellos.

Los seis puntos a los que me voy a referir son: contexto; transferencias monetarias; programas educativos que desarrolla el Mides en cogestión con la ANEP; programas sociolaborales; programas derivados al núcleo más duro de la pobreza, es decir a ese 5 % de pobreza estructural que aún se mantiene, y reflexiones finales, transmitiendo a la Comisión Permanente dos o tres iniciativas que van a comenzar en 2014, que son nuevas estrategias que vamos a desarrollar a continuación.

Con respecto al contexto, quisiera plantear cuatro cosas. En primer lugar, voy a dar algunas cifras, algunas de las cuales ya mencionó la Legisladora convocante.

En segundo término, voy a referirme al porqué de la evaluación.

En tercer lugar, hablaré de los sistemas de información y, por último, de la reestructura que realizó el Mides para que estos resultados sean posibles.

En cuanto a los datos del contexto, que voy a retomar al final cuando haga mis conclusiones, quisiera usar un minuto para citar algunas cifras.

En 2004, la pobreza en Uruguay representaba el 39,6 %, y en 2012 se cerró con un 12,4 %. Nuestras estimaciones para 2013, –aunque la información todavía no está terminada de procesar– está levemente por debajo del 12 %. Creemos que en 2014 rondará el 10 %. Estos porcentajes significan que entre 2004 y 2012, 850.000 personas dejaron de ser pobres.

Con respecto a la indigencia, debo decir que ha llegado al 0,5 %, por encima del margen de error estadístico de la encuesta de hogares. En tal sentido, la Cepal ha manifestado que ha quedado erradicada la pobreza extrema, lo que significa que 120.000 personas que estaban en situación de pobreza extrema ya no lo están.

El otro dato que quería mencionar es la desigualdad, el índice de Gini. En Uruguay, en 2004 la des-

igualdad era del 0,437, mientras que hoy es del 0,386, lo que significa un 12 % de mejora en un índice que mide la desigualdad de ingresos entre la población.

Cuando comience con la proyección de la presentación verán que buena parte de los programas del Mides son cogestionados con los servicios de salud y de educación. Esto quiere decir que dependen en buena parte de que los servicios universales de salud y de educación funcionen. En tal sentido, me gustaría recordar las cifras del gasto en educación, salud pública, ANEP, Universidad y ASSE durante los cinco períodos de Gobierno, desde 1990 hasta aquí.

En el período 1990-1994, en pesos reales de 2013, el gasto fue de \$ 22.000:000.000; en el período 1995-1999, fue de \$ 29.000:000.000; en el período 2000-2004, fue de \$ 32.000:000.000; en el período 2005-2009, fue de \$ 41.000:000.000, y en este período de Gobierno, ha llegado a \$ 62.000:000.000, lo que significa un incremento del 50 % respecto al primer período de Gobierno del Frente Amplio y el triple respecto al Gobierno de 1990-1994. Estoy hablando en pesos constantes. Eso ha significado un incremento en el gasto, por usuario en el caso de salud pública o por estudiante en el caso de la educación pública, de más del 50 % en términos reales.

Dentro del primer punto de contexto, lo siguiente que quería plantear es la importancia de la evaluación. Esto ha sido un rasgo distintivo de estos nueve años. En general, las evaluaciones no eran un desarrollo importante en los períodos de Gobierno anteriores. Hoy tenemos tres organismos en el sector público que tienen la misión legal de evaluar: el recientemente creado Instituto de Evaluación Educativa en materia de educación; la AGEV, Área de Gestión y Evaluación del Estado de la OPP en materia de inversión pública y políticas públicas, y la Dinem, Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, abocada a la política social.

Cuando lean el documento de evaluación que hoy vamos a entregar y lo comparen con el del año 2011 –que también lo tienen, porque fue entregado a todos los Legisladores–, verán una altísima correlación entre los problemas detectados en el informe que se hizo en 2011 –problemas de focalización de la tarjeta, de fragmentación de los programas, de impacto de algunas estrategias– y el actual y cómo, evaluados esos problemas, las estrategias 2011-2012 tendieron a resolverlos. Y si comparan ambos informes, van a ver los resultados sustantivamente distintos en uno y en otro, que es lo que voy a repasar inmediatamente.

Otro punto de contexto es que la evaluación tiene una condición básica, que son los sistemas de información. No se puede evaluar sin sistemas de información rigurosos, científicos y elaborados. Como los

resultados en política social surgen –en política económica también– de la interacción de muchos Ministerios, en el año 2007 se decidió crear el Sistema de Información Integrado del Área Social –Siias–, que incluye a todos los organismos que allí están descritos: el Mides, el BPS, ASSE, el MSP, INAU y, hace un año, se integraron la ANEP y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Seguramente, conocen los impactos del Siias y, en particular, el reciente estudio que se hizo para cruzar las Asignaciones Familiares que el Mides otorga con la asistencia escolar y liceal, lo que determinó que un 6 % de las Asignaciones Familiares fueran dadas de baja por la no asistencia al sistema educativo y que el restante 94 % se conservaran ya que asistían. Pero, más allá de eso, tiene muchísimas otras utilidades. Hoy, los niños nacen con un certificado de nacido vivo digital, electrónico, que, a partir del Siias, transita durante toda su vida escolar, liceal, de asistencia sanitaria, etcétera. Ese es un sistema global para las políticas sociales y, en particular, para el Mides.

Asimismo, en este período de gobierno se ha creado el Smart, un sistema de monitoreo que simplemente lo voy a dar con un ejemplo. Ese sistema permite que todas las mañanas, cuando llego al Ministerio, pueda saber qué personas durmieron en un centro de atención –mal conocidos como refugios– la noche anterior, quiénes están participando, cuántos cupos hay, qué tipo de personas, de qué edad, qué sexo, en fin, contar con toda la información. Lo mismo ocurre respecto al programa de transferencias monetarias o a cualquier otro programa del Ministerio.

Tener el Siias y el Smart son condiciones de sustento que nos permite conocer la situación. Hoy tenemos más de diez millones de datos en el Siias, lo que permite cruzar y tener información de última generación y de último momento sobre todas las políticas sociales aplicadas.

Finalmente, el último punto dentro del primer capítulo –que es el contexto– es que para que esto fuera posible, el Mides –que, como decía la señora Legisladora, había tenido un trabajo muy ligado al Plan de Emergencia durante el período 2005-2008, y su estructura interna había sido adecuada a esa situación de emergencia–, cuando debió reformular su estrategia programática, tratando de llegar a estos núcleos más duros de la pobreza y no a una pobreza del 40 %, tuvo que reestructurarse. Y, de alguna manera, la reestructura –también hemos expuesto aquí en su momento– tuvo como resultado la creación de la Coordinación Interdireccional, con un cargo de coordinación general de todo el trabajo del Ministerio –funciones que, en gobiernos como el chileno, son asimilados a Jefe de Gabinete–, la consolidación de la estructura de gestión del Ministerio a partir de la Dirección General de Secretaría, y la creación de una

única Dirección de Programas. En el Ministerio los programas estaban presentes en aproximadamente seis Direcciones; ahora están concentrados en una única Dirección, la llamada Dirección Nacional de Desarrollo Social.

Al mismo tiempo, hemos concentrado una gran dispersión territorial que el Ministerio tenía con muchos organismos en un mismo territorio, en una única Dirección de Gestión Territorial bajo un solo mando, tanto las oficinas de territorio como los Socat.

Este era el primer capítulo que quería plantear que, reitero, tiene que ver con el contexto de la política social y el gasto público global, con los sistemas de información y la reestructura interna que ha sido –a nuestro juicio, y así lo expone el documento– el factor clave para transformar estos resultados que hemos leído.

Ahora me voy a referir al segundo capítulo, que es el de las transferencias monetarias, y voy a comenzar con la tarjeta Uruguay Social.

En primer lugar, quiero recordar –no está en la transparencia, porque lo que se muestra allí es la evaluación de los resultados de estos dos años– que la tarjeta Uruguay Social es una herramienta de transferencia monetaria, un sistema mediante el cual se permite la compra de alimentos y productos de higiene a través de una tarjeta, cuyos montos van desde \$ 700 para un hijo y tarjeta simple, hasta casi \$ 3.000 para más de cuatro hijos y tarjeta duplicada, o sea, para el sector más crítico. Asimismo, el acceso a la tarjeta se realiza a través del Índice de Carencias Críticas, un índice construido por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, lo que garantiza rigor científico e independencia técnica. En ese sentido, podemos decir que su metodología ha sido solicitada por muchos organismos de políticas sociales de otros países que están aplicando políticas de transferencias monetarias en términos de focalización con mucho menos éxito que las que estamos teniendo nosotros.

Hoy, hay 63.000 tarjetas Uruguay Social. Si esto lo comparamos con el Plan de Emergencia, que actuó sobre 112.000 hogares, quiere decir que estamos en la mitad, fruto de la mejora de la situación económica que han tenido esos hogares. De esas 63.000, unas 27.000 son tarjetas duplicadas; ese número ha aumentado porque, precisamente, la estrategia ha sido concentrar el esfuerzo de la transferencia monetaria en el sector más crítico. Sin embargo –como establece el informe anterior, el de 2011–, había problemas de focalización de la tarjeta, había errores muy importantes en cuanto a su otorgamiento, y eso se corrigió a partir de 110.000 visitas realizadas.

En el cuadro los señores Legisladores podrán ver que está hecho para julio de 2013, cuando llevábamos 81.000 visitas, y no está actualizado porque los porcentajes de cambios son básicamente los mismos. Es decir que la mitad de las visitas generaron un cambio en la situación respecto a la tarjeta Uruguay Social: una mitad por baja y una mitad por altas, y las altas estuvieron vinculadas, básicamente, a la transformación de la tarjeta simple en tarjeta doble.

En este punto de las transferencias monetarias queremos hacer una referencia que la señora Legisladora también hacía, y que nos parece muy importante, sobre la cual hemos elaborado un documento mucho más profundo que también acompaña la evaluación que hemos traído y que tiene que ver con esta pregunta de para qué ha servido la tarjeta Uruguay Social. La primera respuesta es, obviamente, que ha servido para que personas que estaban en situación de hambre pudieran acceder a alimentos y a productos de higiene. Pero la segunda respuesta, y a la que me quiero referir ahora, tiene que ver con el papel de la transferencia monetaria en la generación de otros ingresos por parte de la población que la recibe. ¿Por qué? En la literatura internacional sobre transferencias monetarias, hay una gran discusión sobre cuál es el punto de equilibrio para una tarjeta.

Si la transferencia monetaria es muy baja, es incapaz de resolver el problema básico de la alimentación; si es muy alta, puede generar un desestímulo a buscar trabajo para tener otros ingresos. Creo que hemos logrado el equilibrio justo y que, una vez que reciben la transferencia monetaria y dejan de estar en situación de hambre, las personas puedan salir a buscar trabajo.

¿Por qué tomamos el 5 % y el 20 % de la población? Porque la Encuesta de Hogares no nos indica cuántos reciben tarjeta y cuántos Asignación Familiar. Pero en tanto las tarjetas se entregan al 5 % de los hogares y se paga Asignación Familiar al 20 %, y como el vínculo entre focalización y transferencia está muy aceitado, proponemos ver qué pasa con el 5 % y el 20 % más pobre, asumiendo la distribución que ya expusimos.

Lo primero que vemos es que de ese 20 % de hogares, el 77,8 % tiene transferencias no contributivas, lo que significa que estamos focalizando bien la herramienta, un éxito muy importante que queremos remarcar. Al mismo tiempo, las personas trabajan, porque su tasa de empleo creció, su tasa de desempleo cayó, su informalidad descendió y sus ingresos por trabajo representan el 57 % de los ingresos del hogar, habiendo crecido el total del ingreso un 77 % en este período.

Recordemos que los ingresos de las familias uruguayas en general crecieron, en el mismo período, al-

rededor del 44 %, lo que significa que en el 20 % de esos hogares que mencioné el ingreso creció treinta puntos más que la media.

Lo que nos muestra el siguiente cuadro es la concurrencia a institutos de educación de los integrantes de hogares que están comprendidos en ese 20 %. En la franja de 0 a 3 años, pasa de 17 % a 31 %; en 2004, había 31.681 cupos en los CAIF, a los que concurren los niños de hogares de menores ingresos, y en 2012, se llegó a 48.200, dado que este Parlamento aprobó una norma que tenía como finalidad financiar cien CAIF nuevos entre 2010 y 2014. Inclusive, de acuerdo con las estimaciones, es muy posible que a fines de 2014 nos encontremos por encima de los 50.000 cupos. A esto se suma una estrategia adicional de entrega de bonos para asistencia a guarderías privadas

El otro incremento importante se dio en educación secundaria, muy ligado a las estrategias de apoyo a estas familias del primer nivel de ingresos y al papel que cumplió la Asignación Familiar, que el Plan de Equidad multiplicó por tres para concurrencia a centros liceales. Entonces, de acuerdo con el Siias, el 94 % de los receptores de Asignación Familiar asiste a institutos de enseñanza primaria y secundaria.

Por su parte, en el 5 % más pobre, los resultados son similares: aumentan la tasa de empleo, los ingresos provenientes del trabajo son el 43 %, superior a las transferencias monetarias, y vienen mejorando. Con la asistencia educativa pasa prácticamente lo mismo: crece de manera muy importante el tramo de cero a tres, y en el Ciclo Básico, crece 9 % con relación a 2006. En este caso, las cifras que se tomaron no son de 2004 a 2012, sino de 2006 a 2012, porque la encuesta de hogares hizo un cambio metodológico que comenzó en 2006 y es preferible hacer estas comparaciones para evitar los empalmes que implican los cambios de metodología. Por eso, en todo el trabajo, algunas cifras se comparan de 2004 a 2012, y otras, de 2006 a 2012, dependiendo de lo que se trate.

Queremos hacer una última referencia relativa al Programa de Atención en Situación de Calle, altamente sensible por el impacto que tiene sobre una población muy vulnerable. En el informe de 2011 verán que había serios problemas de cobertura; pasamos de 546 cupos existentes en ese año a 1.430 en 2012. No figura en el informe, porque no incluye los últimos datos, pero en 2013 llegamos a 1.700 cupos en 48 centros.

En el cuadro siguiente se muestra la distribución por tipos de centros: hemos pasado a tener el 50 % de centros de veinticuatro horas. Ya hemos modificado la estrategia, reduciendo los centros nocturnos y aumentando los de veinticuatro horas, que pasaron a ser 437, en particular, para madres con niños, con

supervisión sobre la asistencia escolar y liceal y capacitación de las madres.

El tercer punto refiere a los programas socioeducativos. Decidimos elegir dos: Formación Profesional Básica de UTU y Compromiso Educativo. Sin embargo, si usáramos el programa Tránsito Educativo, el programa Maestros Comunitarios o el programa Fortalecimiento Educativo, continuación del programa Yo Sí Puedo, los resultados serían los mismos. El primero, FPB, es para las personas que han abandonado el sistema educativo; permite que retornen y se formen en un oficio para recuperar su inserción educativa y laboral, y el segundo, Compromiso Educativo, es para personas que no se han desvinculado del sistema educativo, que inclusive aprobaron el Ciclo Básico porque están cursando Bachillerato, y procura asistirlos para que lo culminen y lleguen a la educación terciaria.

La población objetivo de ambos programas es muy distinta: una es más vulnerable que la otra, que se encuentra en una franja superior de ingresos. Con ellos, nos hemos propuesto medir la permanencia en el sistema educativo. Por ejemplo, la UTU brinda formación profesional básica, y están los Comunitarios, que son gestionados conjuntamente con el Mides. Como se muestra en los esquemas, en ambos se registra un crecimiento muy relevante –desde 2009 a 2012– de la aprobación y una importante caída del abandono.

Este es el cuadro principal que queremos destacar, porque el programa de Formación Profesional Básica pretende recuperar y vincular nuevamente a los jóvenes a la educación y que no vuelvan a desvincularse. Por su parte, el abandono, en 2012, está entre el 5 % y 7 %, según el año cursado y el segmento.

También traemos resultados de aprobación y de deserción de Compromiso Educativo. Cuando se compara a los estudiantes que están en este programa con otros del mismo centro educativo, con una situación socioeconómica similar, pero que no participan del programa, se percibe una diferencia del 18 %. En cuanto a la continuidad, también hay una diferencia, en este caso del 16 %, en los que se inscriben. En resumen, es una comparación entre personas que están y no están en Compromiso Educativo de un mismo centro y con el conjunto de estudiantes de Secundaria, en cuyo caso, la reinscripción es un 14 % superior.

En 2013, culminó sexto año la primera generación de Compromiso Educativo. Todavía no están los resultados de cuántos de los que iniciaron cuarto año en 2011 culminaron y se inscribieron en educación terciaria, obviamente que comparados con la cohorte de jóvenes en situación socioeconómica similar. Di-

chos resultados los haremos llegar en su momento, aunque los números primarios que tenemos nos dan que un importante porcentaje de quienes iniciaron Compromiso Educativo en cuarto año en 2011 han podido culminar sexto año e inscribirse en carreras terciarias.

El cuarto capítulo corresponde a programas socio-laborales. Hay un primer dato, que no figura en el informe y es muy importante para marcar la tendencia de estos programas. Recordemos que para ingresar al programa Uruguay Trabaja se requieren dos años de desocupación, sin aportes al Banco de Previsión Social, y una escolaridad inferior al tercer año de Ciclo Básico. Se cruzan estas dos condiciones y se hace un sorteo para cubrir 3.000 cupos, cuyo financiamiento votó el Parlamento Nacional en 2008, cuando aprobó la ley de Uruguay Trabaja.

En 2008, cuando empezó el programa, se inscribieron 26.000 personas para el sorteo de 3.000 cupos; en 2009, 20.000, y así sucesivamente. En 2013, se inscribieron 8.500, es decir, la tercera parte de los que se habían inscripto en 2008, lo que significa que la población con esa escolaridad y con dos años de desocupación había disminuido. A fines de marzo de 2014, empiezan las inscripciones para el programa que comienza en mayo de 2014, por lo que en ese momento tendremos información acerca de si los inscriptos de 2014 continúan la tendencia a la baja de 2013.

Uno de cada dos, es decir, el 49 % de los participantes, luego de haber estado en el programa Uruguay Trabaja cotizó en el Banco de Previsión Social, demostrando que existe una reinserción en el sistema laboral; en ese sentido, un número importante de cooperativas se generó a partir del programa Uruguay Trabaja. La ley de Rendición de Cuentas aprobó algunos cambios para Uruguay Trabaja, por ejemplo, que la población más vulnerable que se inscribe en el programa tenga acceso directo a los cupos, sin participar en el sorteo. Se votó que esto fuera posible para población afrodescendiente, discapacitada, trans...

SEÑOR ABDALA.- Para la población trans, no.

SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL.- Perdón, tiene razón el señor Legislador Abdala; tampoco se votó para la población afrodescendiente y sí de alta vulnerabilidad. Los criterios quedaron a cargo de la reglamentación.

Lo que quiero decir es que con el 21 % de los cupos directos vamos a trabajar con población afrodescendiente, discapacitada, personas egresadas del Programa Jóvenes en Red, de Uruguay Crece Contigo y de Cercanías; el 79 % restante seguirá adjudicándose por el régimen de sorteo.

También redujimos a siete los grupos de Montevideo, en la medida en que el año pasado hubo zonas del departamento en las que la población inscripta fue inferior a los cupos que correspondían a esa zona; y se aumentaron los grupos en el interior, particularmente en ciudades que no son capitales, por ejemplo, Cardona, Baltasar Brum, Lascano, Castillos, Piedras Coloradas –Paysandú– y algunas más, para diversificar la población.

Los programas sociolaborales también incluyen a las cooperativas y los emprendimientos. Hoy tenemos 280 cooperativas en diferentes emprendimientos. En 2011 eran 140, y habíamos asumido el compromiso de duplicarlas, a partir de una demanda muy fuerte de cooperativas sociales, particularmente de las Intendencias Departamentales de todo el país; algunos lugares, como Cerro Largo, no tenían ninguna y demandaban su inclusión.

Seis de cada diez emprendimientos comercializan sus productos por pedido, y hemos llegado a la conclusión de que el problema de nuestra área sociolaboral, en particular de los emprendimientos y de las cooperativas, son las dificultades para comercializar y desarrollarse más allá de la demanda pública, que es inmediata y que está garantizada por ley, porque tiene prioridad en las compras públicas. Por lo tanto, vamos a anunciar una nueva medida en este sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Interrumpo al señor Ministro para decir que los señores Legisladores no logran ver las transparencias. Por eso, estamos tratando de reproducir el informe lo más rápido posible para que los señores Legisladores puedan contar con el documento en papel y puedan seguir mejor la exposición del señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL.- Gracias, señor Presidente.

El otro aspecto sociolaboral tiene que ver con la formalización. Sabemos que es un problema muy importante para pequeños emprendimientos que nacen a partir de una alta vulnerabilidad. Aun el monotributo común es un problema, y por eso creamos el monotributo social, que es igual al común, pero tiene la ventaja de que se puede pagar en cuatro años; son poco más de \$ 1.000: el primer año se paga un 25 %, el segundo, un 50 %, el tercero, un 75 % y recién al cuarto año se paga todo el monotributo. Para acceder a él hay que estar en las mismas condiciones económicas de venta del monotributo general y, además, el Índice de Carencias Críticas debe determinar la vulnerabilidad de las personas que realicen el emprendimiento.

Un total de 967 emprendimientos fueron aceptados por el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco

de Previsión Social para el monotributo y 2.313 están en proceso en el Banco de Previsión Social o en el Ministerio de Desarrollo Social, dependiendo del monotributo.

El quinto capítulo tiene que ver con programas prioritarios, dirigidos fundamentalmente al sector de pobreza más extrema, al 5 % de la pobreza estructural, aunque en algunos casos puede extenderse hasta el 15 % de la población en situación de pobreza. Queremos destacar que estos programas surgen a partir de una autocrítica de la manera de abordar la política social y territorial en el sector del núcleo más duro de la pobreza, y la necesidad de crear programas de nueva generación que lleguen directamente al territorio, que se basen en la cercanía y el acompañamiento de las personas y que generen un trato casi individual entre el número de técnicos y las personas.

En esa lógica, se hicieron tres programas interinstitucionales y en todos participan el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y Cultura, ANEP, ASSE el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Uno de ellos es Uruguay Crece Contigo y lo coordina la Presidencia; sus resultados están siendo evaluados y serán presentados en su momento en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los resultados de los otros dos, dado que el Ministerio de Desarrollo Social tiene una labor de coordinación, serán presentados ahora.

A su vez, los programas prioritarios –Jóvenes en Red, Cercanías y Uruguay Crece Contigo–, además de ser de nueva generación basados en cercanías, focalización extrema, territorio y acompañamiento, tienen otras características comunes: que las bases de datos sobre las que se construyen son únicas y se derivan entre programas, es decir, no llega a un hogar un técnico de Uruguay Crece Contigo, al otro día, uno de Jóvenes en Red, etcétera, porque hay una base de datos común que permite identificar a esos hogares y ahí se determina su derivación al programa más adecuado.

Este es un cambio cualitativo sustancial, sobre todo en zonas de alta concentración de exclusión, como las comprendidas por la intervención en siete zonas, la zona metropolitana o el arco norte del país, Artigas, Rivera, Cerro Largo.

Entre esos programas prioritarios tenemos el programa Cercanías; los cuadros que estamos mostrando en este momento refieren a la cantidad de familias sobre las que se trabajó, que corresponden a todo el país, alrededor de 1.800. A octubre de 2013, ya se había trabajado con 1.211 familias; se sigue trabajando para completar la totalidad de estos hogares.

En el caso de Jóvenes en Red hablamos de un programa que pretende llegar a jóvenes que no estudian ni trabajan y están en situación de alta vulnerabilidad. A veces, se ha identificado mal el concepto de jóvenes que no estudian ni trabajan, asociándolo a población que no hace nada. Este es un error bastante importante; solo el 30 % de los jóvenes que no estudian ni trabajan no busca trabajo o no están cuidando a alguien. El 70 % está en actividades de cuidados –hermanos, hijos o abuelos–, está buscando trabajo o está haciendo changas en el sector informal.

Sobre ese núcleo, cruzado con vulnerabilidad social, trabaja el programa Jóvenes en Red. En el día de ayer, por ejemplo, lo presentamos en Rivera y Tacuarembó, donde comenzará a ponerse en práctica. En Tacuarembó, el número de jóvenes en estas condiciones de no estudiar ni trabajar, cruzado con vulnerabilidad social, es de 587, y en Rivera, 742. Hay otros tantos en los nueve departamentos en los que Jóvenes en Red está instalado: los cinco originales, es decir, Montevideo, Canelones, San José, Artigas y Cerro Largo, y los cuatro nuevos en los que se empieza a trabajar a partir de este mes, que son Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó.

Este programa tiene tres componentes: un componente social, un componente educativo y un componente laboral.

Quiero pasar rápidamente a los resultados de este programa en su primer año en los cinco departamentos en los que estuvo instalado. Se trata de un compromiso que teníamos con el Parlamento, dado que, cuando vinimos a presentar el programa en la instancia de Rendición de Cuentas anterior a la última, se nos pidió que diéramos información sobre su evolución.

Como indica el cuadro que estamos mostrando, de los 2.280 jóvenes que integraron el programa, 664 se inscribieron en el Ciclo Básico y 523 lo hicieron en otras experiencias educativas, como cursos básicos de UTU, Cecap, Centros Juveniles del INAU, Programas del MEC. Quiere decir que, en el primer año, alrededor de 1.200 –la mitad– se vinculó nuevamente con el sistema educativo.

Por otro lado, 382 reingresaron a actividades laborales formales, 225 a actividades informales y 10 a emprendimientos juveniles. Estas cifras representan el 25 % de los jóvenes que ingresaron al programa. El cuadro indica que el 25 %, uno de cada cuatro jóvenes que ingresaron a Jóvenes en Red aún no ha vuelto a vincularse con sistema educativo o el sistema laboral; el 50 % se ha vinculado nuevamente a la educación, el 14 %, al trabajo, y un 12 %, simultáneamente, a la educación y al trabajo.

En síntesis, tres de cuatro jóvenes que ingresaron a Jóvenes en Red tuvieron procesos de revinculación, y uno de cada cuatro aún no lo ha tenido. Es un resultado realmente importante. Estamos trabajando en una sistematización más cualitativa, porque también importa saber qué tipo de jóvenes accedieron a los programas de Jóvenes en Red. En general, son jóvenes desvinculados hace tiempo, no ayer ni anteayer. Inclusive, algunos tienen uno, dos o más años de desvinculación del sistema educativo.

Quiero culminar esta intervención con algunas reflexiones finales sobre el trabajo que hemos presentado y que, obviamente, está mucho más detallado en el material que ustedes tendrán a disposición.

Repasando los datos que la señora Legisladora daba y que yo también mencioné al principio, sobre cambios en la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema por ingresos, el Índice de Gini, el desempleo y el salario mínimo, quiero referirme a cómo incidieron estos aspectos en los resultados.

Las transferencias monetarias –primero, el Plan de Emergencia y, ahora, las transferencias– han sido bastante evaluadas. Si así lo quieren, pueden tener dos evaluaciones del Plan de Emergencia: una, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, y otra, del Banco Mundial. Ambas coinciden en que estos aspectos son relevantes en la erradicación de la pobreza extrema, es decir, generan un cambio cualitativo en los ingresos de los hogares para la erradicación de la pobreza extrema. Y como actúan sobre la brecha de la pobreza –definida como lo que le falta al hogar o a la persona para salir de esa situación por debajo de la línea de pobreza– y permiten la generación de otros ingresos, contribuyen a la reducción de la pobreza, no porque el monto de la transferencia permita superar la línea de pobreza –eso sería financieramente imposible y, además, conceptualmente incorrecto–, sino por el papel que cumplen en la línea de base, que levantan para que las personas obtengan otros ingresos.

Esto ha sido particularmente importante en lo que refiere a la pobreza de los hogares monoparentales de jefatura femenina, dado que tanto la TUS –Tarjeta Uruguay Social– como las AFAM –Asignaciones Familiares– se otorgan a las mujeres. Cuando el hogar es monoparental resulta obvio que esto debe ser así. Pero en los casos de hogares en los que están presentes el varón y la mujer, también se otorga a la mujer. Esto es muy importante en el desarrollo del papel de la mujer, de su autoestima para su rol de integración social y en la vida cotidiana y familiar.

Este es un tema muy discutido, porque también se puede sostener que otorgar la tarjeta y la Asignación Familiar a la mujer para la administración de

los gastos reproduce un papel histórico de las mujeres como administradoras de los gastos del hogar. Sin embargo, los estudios cualitativos y cuantitativos que hemos hecho muestran que el principal factor ha sido el empoderamiento de estas mujeres y su salida hacia el mercado de trabajo e, inclusive, su revinculación educativa.

(Ocupa la Presidencia el señor Legislador Baráibar).

–Quiero referirme a otro aspecto cualitativo.

¿Qué tienen en común todos estos programas, es decir, las transferencias monetarias, pero, sobre todo, los programas como Compromiso Educativo, Formación Profesional Básica, Tránsito Educativo, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, Cercanías? ¿Qué tienen en común? Atacan poblaciones relativamente similares, pero con herramientas diferentes y tienen en común la cercanía y el acompañamiento, el trato directo con la población y en su territorio. Eso es lo que de alguna manera sacamos como reflexión y conclusión del éxito de estos programas: los quince puntos de Compromiso Educativo, los diez puntos de Formación Profesional Básica, el 75 % de los jóvenes que ingresaron en Jóvenes en Red y se revincularon.

Todos esos éxitos están asociados a esta estrategia de cercanía, que tiene un importante costo fiscal pero, al mismo tiempo, un importante beneficio en materia de generación de ingresos y de inclusión social.

Como me comprometí a hacer al principio, voy a mostrar solo dos láminas, para contar algunas cosas que se van a hacer en 2014 que están vinculadas al desarrollo de estos programas. Por un lado, se trata de programas que ya existen y se van a ampliar y, por otro, de algunas cosas nuevas.

Con respecto a los programas que vamos a profundizar, ya hemos anunciado que vamos a pasar de veinticinco a sesenta los espacios que tiene Tránsito Educativo. Como ustedes recordarán, Tránsito Educativo es un programa que capta niños en el segundo semestre de sexto año de escuela. Se trabaja en verano a través de campamentos educativos; ahora mismo se están desarrollando estas estrategias. Luego, se sigue al alumno durante todo el primer semestre de primero de liceo. Durante estos dos primeros años de aplicación de este programa se ha obtenido como resultado que quienes ingresaron en 2012 van a llegar a segundo año de liceo en 2014, porque lograron transitar ese nudo crítico de la desvinculación de primer año de liceo en las vacaciones de julio.

En cuanto al programa Compromiso Educativo, queremos señalar que lo vamos a universalizar a todo

el país y va a estar en los lugares donde no existía. Además, van a ingresar alumnos de sexto año, porque el programa fue aumentando progresivamente su escolarización, y a esto se agrega que vamos a ampliar a 7.000 las becas que se van a otorgar; el primer año eran 1.800; luego, pasaron a 4.000, 5.000 y este año vamos a llegar a cerca de 7.000.

En lo que refiere a innovaciones –como lo muestra con mucha claridad el informe que, como siempre tratamos de hacer, pone las luces y las sombras, lo bueno y lo que todavía no está tan bueno–, podemos afirmar que están concentradas en el área de la inserción laboral de muchos de los programas del Ministerio. La conclusión a la que llegamos –que comentábamos y que el documento desarrolla– es que los problemas de comercialización de muchos de los emprendimientos y de las cooperativas están muy centrados en la demanda pública y no logran expandirse y consolidarse en la acumulación tanto cuando venden un bien como cuando prestan un servicio.

Por eso, como dice el documento que presentamos, para todos aquellos emprendimientos que tuvieron origen en el Ministerio de Desarrollo Social y que cumplen ciertas condiciones básicas de formalización vamos a definir una marca social que lo que refleje sea casi como un sello de calidad de una empresa exportadora, y se vincula con la calidad y su competitividad. Aquí, la calidad está asociada al valor agregado social que estos proyectos generan y, por lo tanto, queremos que quienes los comprenden sepan que están adquiriendo un bien o usando un servicio cuyo origen fue una población excluida que, de alguna manera, los programas del Ministerio fue incorporando.

Obviamente, esto tiene ciertos requisitos formales; por ejemplo, en el caso de alimentos se hace hincapié en todo lo que tiene que ver con su correcto manejo. Esto lo vamos a lanzar este año y va a involucrar a un porcentaje muy importante de los emprendimientos que hoy desarrolla el Ministerio.

Por otra parte, quiero señalar que vamos a hacer realidad lo que dice la ley de cooperativas sociales, en cuanto a que ellas son un instrumento de transición para consolidar una situación de exclusión y que luego deberían pasar a ser cooperativas de trabajo, con las normas correspondientes. En 2012, de las 280 cooperativas existentes, solo una había pasado a cooperativa de trabajo. Hemos trabajado fuertemente en este aspecto, a través de auditorías. Este año, 10 cooperativas sociales se van a transformar en cooperativas de producción. La idea es que este proceso siga de manera permanente.

A su vez, este año culminaremos con la implementación en todo el territorio de los servicios que atienden la violencia doméstica, que en 2004 existían

solo en el departamento de Montevideo. En 2012 se incorporaron en dieciséis departamentos y en 2014 se van a instalar –ya está la licitación realizada– en los tres departamentos que faltaban para completar los diecinueve: Flores, Soriano y Treinta y Tres.

No voy a hacer referencia a las nuevas modalidades del programa Uruguay Trabaja que se aprobó en la Rendición de Cuentas, porque ya las comenté en su momento.

Esto es lo que teníamos para presentar. Entendemos que lo que hemos presentado es una continuidad de nuestra evaluación anterior, que tiene que ver con lo que ha ocurrido en estos dos años, que está muy vinculado a las políticas sociales en general y, en particular, a la reestructura que el Mides realizó, para que estas puedan ser posibles, para romper su fragmentación, su solapamiento y sus problemas de focalización. Aquí están los resultados, que entendemos que son los que debe pedírseles a las políticas sociales cuando actúan en sectores de alta exclusión. Es imposible pensar que los resultados sean rápidos e inmediatos. Lo que pretenden estas políticas es el sostenimiento y la revinculación de las personas al sistema de integración social y trabajar sobre el sistema universal de salud, sobre el sistema universal de educación y sobre el sistema universal de trabajo. Estos programas les abren las puertas de entrada a esta población excluida; son *by-pass* hacia esos sistemas universales. Por eso, el 98 % del presupuesto está asignado a políticas universales y solo el 2 % –US\$ 250.000.000– a políticas de transferencias monetarias y de asistencia, como dice el informe que hemos presentado.

Quedamos a las órdenes para lo que se disponga.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Baráibar).- Tiene la palabra el señor Legislador Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: después de escuchar a la señora miembro convocante y al señor Ministro en su primera intervención, a mí me vino a la memoria una campaña que actualmente está en los medios de comunicación, que promueve una candidatura presidencial ficticia de un señor llamado Salvador, que apunta, según una firma de plaza, a cortar con la dulzura. Realmente, lo que hemos escuchado es un planteo absolutamente lineal y monocorde donde el nivel de coincidencia y de unanimidad es absoluto, y es legítimo. No pretendemos cortar con tanta dulzura, pero vamos a intentar ponerle un poco de sal a la discusión y dar una visión diferente, reconociendo aciertos, pero marcando algunas insuficiencias que creemos que el Gobierno exhibe con relación

a estas políticas que hoy son motivo de debate en la Comisión Permanente.

La señora miembro convocante habló del cumplimiento de objetivos, de un país más justo, más próspero, más inclusivo, y yo no dudo de que eso haya estado en la intención del Gobierno actual y del anterior, pero me temo que estamos bastante lejos de lograrlo en términos de alcanzar los objetivos en forma absoluta con relación a esos propósitos ambiciosos que todo Gobierno debe perseguir. Yo no advierto, y lo digo con toda sinceridad –más allá del derecho de todo Gobierno a impulsar las políticas que entien- de convenientes y de realizar el diseño institucional, administrativo, político y burocrático, inclusive, que considere necesario impulsar–, que realmente se haya dado un proceso de cambios sociales de tal profundidad como aquí se ha pretendido invocar. En todo caso, pretender fundamentar eso solo o exclusivamente con la circunstancia de que hayan bajado los índices de pobreza es, por lo menos, cometer un tremendo error.

Decía la señora miembro convocante que la pobreza no se mide solo por el ingreso. En el Uruguay se mide por el ingreso, porque es una medición unidimensional que, precisamente, determina quiénes están por encima o por debajo de la línea de pobreza en función de lo que a ese hogar ingresa desde el punto de vista monetario.

Por lo tanto, con las prestaciones y transferencias monetarias que se realizan en el marco de los planes sociales, alcanzaría –de hecho, fue así– para que bajen los niveles de pobreza. Eso, por supuesto, no está mal, y nosotros no solo votamos la creación del Ministerio de Desarrollo Social, sino también todas las leyes que el Gobierno puso en discusión con respecto a todos los programas que fueron descriptos por el señor Ministro, pero siempre lo hicimos sobre la base de la visión crítica, ya que solo con eso no alcanza –ni siquiera con las contraprestaciones, sino con un conjunto de medidas complementarias que deben funcionar muy bien– para llegar al objetivo que todos sabemos que es necesario e indispensable, como es lograr la inclusión social. De todos modos, no hay que confundir baja de la pobreza con inclusión social, porque son cosas parecidas pero francamente diferentes; de no ser así no se explicaría que Uruguay haya descendido siete puestos en la última medición del Índice de Desarrollo Humano que realiza Naciones Unidas y que dio a conocer el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Según esa medición, bajó del lugar 43, en el que se encontraba en el año 2006 –primer año de Gobierno del Frente Amplio, porque dicha medición refería al año 2005–, al lugar 51, que fue el que ostentó en el año 2013, Gobierno presidido por el señor Mujica.

El señor Ministro nos trajo –quiero agradecerlo– el informe de la Dirección de Monitoreo y Evaluación del Ministerio relativo al período 2011-2012, el cual vamos a analizar muy detenidamente. Pero el antecedente que tenemos es el que el señor Ministro refería, es decir, la medición anterior, que corresponde al año 2009-2010, que se elaboró en 2011 y se dio a conocer en 2012. Esa medición, francamente, arrojó conclusiones verdaderamente preocupantes, negativas y deficientes. Además, de ese informe surge –lo debatimos en el ámbito de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes– un conjunto de falencias –así se dice en el informe– muy severas en términos de dificultades en el diseño de los programas y en la determinación de la población objetivo. También se plantean problemas de monitoreo y evaluación del impacto de los distintos programas en cuanto al cumplimiento de sus objetivos, como así también debilidades en los diagnósticos y ausencia de diagnósticos acabados en cuanto al problema social al que están dirigidos los diferentes programas. Eso es lo que arrojó el informe anterior; veremos qué indica el informe actual, un año después, pero está claro que las cosas no cambiaron demasiado, o tuvieron una evaluación favorable –lo que nos alegraría mucho y, por supuesto, no descartamos– o ha habido una suerte de revolución silenciosa en el último año de la cual no tuvimos noticia y no nos dimos cuenta a pesar de que vivimos en Uruguay, y esos diseños, falencias, defectos o imperfecciones severas en materia ni más ni menos que del cumplimiento de los programas en cuanto al vínculo entre su ejecución y el alcance de los objetivos no cambió de manera tan drástica y dramática como el propio Ministerio ha dicho, ya que estamos hablando de informes elaborados por dicha Cartera entre 2009 y 2010.

En esa misma etapa hubo un cuestionamiento muy severo a la aplicación de la tarjeta alimentaria, en realidad, se llama tarjeta Uruguay Social, que tiene que ver con la política alimentaria, que es una política y un programa que yo comparto y aplaudo, ya que considero una evolución desde el punto de vista de la sustitución de las viejas canastas del INDA, y apunta a la inclusión.

Por supuesto, también reivindicó, destaco y reconozco el valor de otros instrumentos, como las cooperativas sociales y el monotributo social, que también fue mencionado en esta sesión. En realidad, nosotros trabajamos en la elaboración de esas normas en el ámbito del Parlamento. Ahora, en ese mismo momento histórico, es decir, en el año 2011, hubo un cuestionamiento muy severo del órgano especializado en materia de alimentación –el Instituto de Alimentación– con relación a la utilización y aplicación de la tarjeta alimentaria para cumplir con el objetivo principal, que es permitir a la población más vulnerable acceder a una alimentación sana y saludable para

mejorar su calidad de vida. Y eso no lo dijo la oposición sino, reitero, el Instituto de Alimentación en un informe que en aquel momento el señor Ministro Olesker contradijo, cuestionó o criticó; inclusive, por lo que pudimos colegir en el ámbito del Parlamento, creo que hasta lo indispuso desde el punto de vista anímico.

Me parece que la Comisión Permanente escuchó un planteo muy interesante del señor Ministro –como lo son todos sus planteos– pero, desde mi punto de vista, fue fundamentalmente de carácter burocrático o institucional. En realidad, ha realizado una descripción programática de las distintas líneas de acción del Ministerio, de la institucionalidad, de los programas y de cómo está organizado el trabajo en la Cartera y en el ámbito del Poder Ejecutivo, lo que es muy interesante. Ahora, eso es solo el comienzo. Sin duda, yo esperaba escuchar más sobre los resultados específicos y sobre los beneficios para la sociedad –fundamentalmente, teniendo en cuenta la perspectiva de la integración y la inclusión social, que si bien son cosas distintas, van en la misma dirección– obtenidos por el país a partir de la aplicación de estas políticas; pero de eso me parece que tuvimos poco.

Por otro lado, creo que en el debate hay que incluir otros informes que el señor Ministro conoce. Por ejemplo, uno que fue elaborado por el Instituto de Ciencias Políticas y la Facultad de Ciencias Sociales, a pedido del Ministerio de Desarrollo Social, que establece –y esto tiene que ver con la lucha contra la pobreza– que hay cerca de cuatrocientos mil uruguayos que están apenas por encima de la línea de pobreza –quienes integrarían lo que imaginaria o científicamente denominamos la clase media– y que están a punto de caer nuevamente en la pobreza porque se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad. Formalmente, los ingresos monetarios los ubican por encima de la línea de pobreza, pero en los hechos, por sus niveles de educación, la situación de su empleo y los demás aspectos que hacen a las necesidades básicas, están a punto, reitero, de caer nuevamente en la pobreza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las prestaciones monetarias son muy bienvenidas, y yo las he votado y lo seguiré haciendo siempre. Por lo tanto, que no se venga aquí con la interpretación o el discurso de que nosotros estamos en contra del reparto de dinero, porque no es así. Nosotros consideramos que cuando es necesario hay que darlo, y el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, si bien es muy importante, es mucha plata, y en sí mismo no es suficiente o insuficiente, sino que depende del uso que le dé. Queremos que eso quede claro, y despejo esa duda en el arranque de esta discusión. De todos modos, las prestaciones monetarias no pueden convertirse en una especie de paño frío que se le pone a una persona que tiene fiebre; cuando eso se hace, la fiebre baja momentá-

neamente, pero cuando se quita el paño frío, obviamente, esta aumenta de nuevo, en la medida en que no se combaten las causas de la enfermedad ya que, en todo caso, el virus o el factor que la provoca no se erradican como debe hacerse.

En realidad, aquí no se ha hablado de un tema del que se debe hablar inexorablemente, que es el atlas sociodemográfico –sobre el que debatimos con el señor Ministro hace muy pocos meses, en noviembre de 2013, en el ámbito de la Comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes–, que tiene que ver directamente con las necesidades básicas insatisfechas y con el tema de la inclusión; además, es actual, de ahora, y refiere a la situación que hoy tenemos en Uruguay.

Dicho mapa apunta a medir la calidad de vida de la sociedad desde la perspectiva de las necesidades básicas insatisfechas, en función de los datos que arrojó el censo del año 2011 y un trabajo que realizó el Instituto Nacional de Estadística con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ese mapa, en función de los métodos y de los sistemas de la Cepal, se aproxima a una medición multidimensional de la pobreza, y me parece que eso es bastante más representativo de lo que pasa en nuestra sociedad, porque ahí no solo se habla de las transferencias, sino de todo, y los resultados son bastante más alarmantes y preocupantes.

El Gobierno, eventualmente, podrá ensayar alguna defensa en ese sentido o explicar que ha habido una evolución, y probablemente la haya habido, pero el punto a tener en cuenta es si a la luz del contexto en el que nos encontramos, del enorme esfuerzo burocrático, económico, presupuestal que se realiza y del crecimiento de la economía en general en Uruguay es suficiente lo que se ha logrado o –planteado en otros términos– si el hecho de que haya más de un millón de uruguayos que tienen por lo menos una necesidad básica insatisfecha no admite cierto grado de irritación o de preocupación subida de tono. Exactamente, hablamos de 1:068.000 uruguayos, que es lo que arroja ese informe, quienes tienen por lo menos una –sí no dos o tres– necesidad básica insatisfecha, entre las que se encuentran el acceso a productos elementales de confort de la vida moderna, como calefón, heladera, estufa, a los efectos de tener un mínimo de calidad de vida. También podemos hablar de una vivienda decorosa, agua potable, conexión eléctrica y, por supuesto, acceso a la educación.

Como dije, estamos hablando de 1:068.000 personas que, llevado a hogares, representan prácticamente 350.000, de los cuales, por lo menos un tercio –seguramente más– tiene más de una de sus necesidades básicas insatisfechas.

Si vamos a la distribución territorial de estos resultados, hay situaciones que ya pasan de la irritación a la alarma. Hay departamentos que viven una situación de verdadera gravedad: en Artigas, alcanza al 54 %; en Salto, al 49 %; en Rivera, al 45 %. Hay barrios enteros de Montevideo donde la insatisfacción de las necesidades básicas llega al 60 %. Hay cerca de cien mil ciudadanos respecto de los cuales no hay información; eso lo arroja el propio informe, fundamentalmente en Montevideo, en zonas muy populares, como las de los Municipios A y F; es decir, las zonas oeste y norte del departamento. Esa es la realidad social que tenemos hoy, en Uruguay, después de la aplicación de las políticas que se han venido desarrollando. Yo no digo que esto descalifique por se esas políticas pero, en todo caso, tenemos que ser cuidadosos a la hora de su evaluación.

(Ocupa la Presidencia el señor Legislador Agazzi).

– Está muy bien que haya venido el Ministro a rendir cuentas y felicito a la señora Legisladora Minetti por haber propiciado esta instancia. Ahora bien, rindamos cuentas, exhibamos resultados, pero controlemos la euforia. A no creer que estamos en el mejor de los mundos, que hemos alcanzado el objetivo de la justicia social, que esto es un dechado de igualdad, de equidad, de ecuanimidad. No; no lo es y, a la luz del crecimiento económico sostenido, espectacular e histórico que el país ha tenido durante los últimos años, creo que esta conclusión se agrava y se agudiza considerablemente.

Finalmente, quiero hacer un apéndice, porque he concluido mis consideraciones generales. Creo que el Ministerio tiene que ser muy cuidadoso a la hora de discriminar en cuanto al otorgamiento de los beneficios de algunos de sus planes, especialmente de las asignaciones laborales, en relación con la discriminación entre colectivos. Eso es materia de la ley, no de decisión administrativa. Definir que el Programa Uruguay Trabaja debe darse en tal porcentaje a los afrodescendientes, a los trans o a cualquier otro colectivo puede ser muy loable. Yo voté y corregí, con el Legislador Bango, quien está presente, el proyecto de ley de acciones afirmativas para la población afrodescendiente, que fue una iniciativa original de la Bancada del Frente Amplio; que quede claro: trabajé decididamente en eso. Ahora bien, la ley es la que debe realizar esas desigualdades positivas, esas acciones afirmativas porque si no, se cae en una tremenda injusticia. El Ministerio está distribuyendo o cuotificando el programa Uruguay Trabaja de manera ilegítima, porque la ley no estableció esa discriminación, salvo una habilitación genérica y se está designando a personal trans sin autorización legal. Eso es una tremenda ilegalidad que afecta a toda la sociedad y también a la propia población trans, porque queriéndola favorecer termina discriminándola, sin

perjuicio de la discriminación notoria de aquellos que tienen un reconocimiento legal, como la población afrodescendiente o los discapacitados. Precisamente, aquí se hablaba del Programa de Discapacidad en forma muy altisonante y todavía no hemos reglamentado la ley de 2009, con los beneficios que consagra para las personas con discapacidad.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR SEMPRONI.- ¿Me permite, señor Presidente?

Moción para que se pase a intermedio por el término de quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

–10 en 10. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

(Es la hora 12 y 33).

(Vueltos a Sala).

–Continúa la sesión.

(Es la hora 12 y 52).

–Tiene la palabra el señor Legislador Semproni.

SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero aclarar que mi intención de intervenir apunta a dos objetivos. El primero de ellos es hacer llegar, a través del señor Ministro, una felicitación a todo el equipo del Ministerio que repartió y publicó el folleto “Mitos y verdades de las políticas sociales.- Datos que demuestran cómo y cuánto se invierte en la población más pobre”. Debajo y al pie aclara que esas políticas apuntan a todos los derechos para todas las personas.

Creo que este es un documento ágil, claro, con letra grande, con cifras contundentes y con dibujos que ayudan a la comprensión de las diferentes propuestas que el Ministerio ha puesto a disposición de la ciudadanía. Muchas veces este material ayuda a los ciudadanos a conocer las posibilidades que tienen, y que a veces no conocen. Lo único que falta aquí es dar una mayor difusión a este material. Ello depende de cada uno de nosotros, de quienes lo recibimos. Tal vez, lo mejor no es que lo dejemos en nuestro poder sino que lo hagamos circular.

Reitero: felicito a todo el equipo de comunicaciones del Ministerio en la persona del Ministro, quien seguramente hará llegar las felicitaciones a los responsables, que yo no sé quiénes son.

En segundo término, quiero señalar, ya al término del funcionamiento de esta Comisión Permanente –que ha sido importante, positiva, y a la cual le quedan muy pocos días de vida; recordemos que el 1.º de marzo, en función del mandato constitucional, esta cesa–, la posición política de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, al no solo votar afirmativamente todas las invitaciones hechas por los restantes partidos que integran esta Comisión sino además, en algunas oportunidades, como la que hoy estamos llevando adelante, proponer convocatorias a distintos Ministros. Entendemos que la presencia de los Ministros en el Parlamento no debe ser exclusivamente para sentarlos en el banquillo de los acusados por lo que pueden haber hecho mal o por lo que no ha dado resultado, producto de una política equivocada. Es muy importante que a través de la difusión de lo que los Ministros vienen a manifestar no solo nos informemos los Legisladores, para el correcto cumplimiento de la función que tenemos a cargo, como lo establece la Constitución de la República, sino también los medios para que esas políticas lleguen a conocimiento de la población, para que esté al tanto de las posibilidades que éstas ofrecen, conozcan los fundamentos de muchas de ellas, el porqué se las aplica y qué destino tienen. Además, para que tenga en cuenta cómo son los planes que los Ministros vienen desarrollando o llevando adelante para cumplir con este último período del año 2014.

Me parece que esto, además, permite a la población ver cómo el Gobierno ha cumplido con su compromiso electoral con la ciudadanía.

Reitero: considero altamente positivas todas las convocatorias. Cada uno podrá atribuir a ellas las intenciones que quiera pero, en definitiva, el éxito y la información que llega a la población en general y el conocimiento para el Cuerpo legislativo, ha sido muy importante.

Por eso, cuando estamos a punto de cerrar el período de trabajo de esta Comisión Permanente que, evidentemente, ha sido bastante arduo, intenso, quiero manifestar que el criterio político con el que nos hemos manejado ha sido altamente positivo.

Muchas gracias.

SEÑOR ABDALA.- ¡Apoyado!

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador Solari.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: quiero agradecer al señor Ministro, al señor Subsecretario y a su equipo la información que nos ha sido proporcionada, tanto el informe del Mides como las transparencias que fueron proyectadas en el día de hoy que, dada la

importancia del tema, obviamente, vamos a estudiar con la minuciosidad del caso.

Entiendo que hubiera sido conveniente realizar esta sesión, esta especie de rendición de cuentas de lo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social, no en una de las últimas sesiones de la Comisión Permanente, que tiene poca cobertura, sino en una sesión plenaria del Senado o de la Cámara de Diputados, donde hubiese despertado el debate, las consideraciones, la profundidad y la repercusión en la opinión pública que este tema tan importante, como la situación social del Uruguay, merece.

El Legislador preopinante hizo referencia a una publicación denominada “Mitos y verdades de las políticas sociales” que, si mal no recuerdo, fue publicada a principios de noviembre del año pasado, y que catalogada por el propio Ministro, en una entrevista que le hiciera Emiliano Cotelo en la radio “El Espectador”, como una campaña publicitaria.

Me tomé el trabajo de ir al diccionario de la Real Academia Española para consultar las acepciones de las palabras *mitos* y *verdades*, porque parecería que una se contraponen con la otra, y no es así; no es que haya mitos de un lado y verdades del otro. Los mitos son relatos o noticias que desfiguran lo que es una cosa, dándole apariencia más valiosa o atractiva. Parecería que en algún lado se está construyendo una especie de relato de la realidad social más positivo de lo que es, y que las verdades que aporta el Ministerio bajan ese relato más positivo a una realidad que no es tan favorable.

(Murmullos).

–No creo que haya sido esa la intención. De cualquier manera, creo que lo que corresponde no es una campaña publicitaria. Lo que corresponde es utilizar los dineros del Ministerio de Desarrollo Social para los fines propios de esa Cartera y no para realizar campañas publicitarias sobre su gestión, con un título que, además, incita a la población a pensar que hay quienes dicen verdades y quienes dicen mentiras. Eso no es así: hay quienes vemos las cosas de determinada manera y hay quienes las ven de otra, pero no son verdades ni mentiras, y mucho menos mitos, como he dicho previamente.

Acá tenemos una discusión ideológica de fondo, que surge muy claramente en esa misma entrevista a la que hice referencia. La discusión ideológica de fondo tiene que ver con una pregunta: ¿cuál es la principal fuente de bienestar de la población? ¿La principal fuente de bienestar es el empleo, la capacidad que tenemos los integrantes de una familia de generarnos un futuro, o la matriz de protección social que administra el Estado?

El Ministro Olesker en esa entrevista, ante una pregunta, dice que el empleo no es la mejor política social y que, en todo caso, eso él lo considera un error conceptual. Más adelante agrega que también gente del Frente Amplio opina de esa manera. Y sostiene: “Es un error, la política social es la salud, la protección social, la educación; el empleo es una fuente de ingresos que, en general, se beneficia cuando hay buenas políticas sociales. Es al revés el círculo”. Y continúa: “La mejor política social es la matriz de protección social que nosotros construimos”. Me imagino que con el término “nosotros” refiere al Ministerio de Desarrollo Social y al resto del Poder Ejecutivo. Luego agrega: “Eso obviamente se tiene que complementar con buenos empleos para que la gente tenga buenos ingresos para consumir bienes, pero los servicios sociales son patrimonio del Estado, no del empleo”.

Esto es la antítesis del pensamiento del Partido Colorado. La fuente principal del bienestar para nosotros es el empleo, sin perjuicio de que, ante determinadas situaciones de desamparo, de indefensión, de fracaso del modelo del empleo, haya que recurrir y construir desde el Estado respuestas adecuadas. Se podrá decir que es una cuestión de énfasis. Sí, pero el énfasis acá hace al fondo de la cosa. Como vamos a ver, la política social de este y del anterior Gobierno fue prácticamente omisa en lo que tiene que ver con el empleo, poniendo enorme énfasis en las transferencias monetarias supuestamente condicionadas, que en realidad no se condicionaron.

Desde mi punto de vista, cuando uno mira desde 2005 para acá y toma cantidades de hogares beneficiados, cantidades de personas beneficiadas en programas de transferencias, llámese asignaciones familiares condicionadas o llámese tarjeta Uruguay Social, estamos hablando de decenas de miles de personas. ¡Y eso estuvo muy bien en el año 2005! Ya había sido iniciado en el año 2004, cuando comenzó la recuperación económica; estuvo muy bien, porque ante una crisis hay que salir y tirar un salvavidas a la persona que se está ahogando. Pero luego de que se salió de la crisis, una vez que la persona vuelve al bote, no es cuestión de seguir poniéndole un salvavidas, sino de enseñarle a remar para salir adelante. Y el Ministerio de Desarrollo Social, el Poder Ejecutivo, el Frente Amplio nunca hizo ese cambio de la política de salvataje a la de desarrollo. Es más: el propio Ministro, en esa entrevista, dice que él está en contra de la exigencia de contrapartidas, que lo hace porque lo manda la ley, pero que es contrario a la exigencia de contrapartidas, por ejemplo, en el Programa de Asignaciones Familiares. Lo considera como un derecho de las personas que están en situación de pobreza, como si estas personas estuvieran prácticamente desvalidas para salir adelante por

sí mismas con una ayuda transitoria. Creo que esta concepción tan volcada hacia lo asistencial y tan poco enraizada en el valor del empleo de cada persona como aporte a la dignidad, al bienestar familiar y a la comunidad toda, esa falta de énfasis, es lo que explica el fracaso de estos dos Gobiernos en los indicadores sociales. Y digo “fracaso” con total responsabilidad y conciencia. Ha caído la pobreza medida por los ingresos; sí, sin duda. Ha caído al nivel de 12,4 % en 2012; todavía no tenemos la cifra correspondiente al año 2013, aunque parecería que esa cifra sería un poco superior a la del año 2012. No lo pude corroborar, pero no tiene importancia: cayó del entorno del 40 % al 12 %; eso es una buena caída. Ahora bien: la pobreza no se define solamente por el ingreso, ni siquiera principalmente. Todas las tendencias modernas de medición de pobreza –anteriores a Amartya Sen, pero fundamentalmente desde Amartya Sen para adelante, y de esto ya hace más de veinticinco años– apuntan a la definición multidimensional de la pobreza. Y según la definición multidimensional de la pobreza, en el censo del año 2012 –que iba a ser el de setiembre de 2010, pero hacerlo llevó un año entero– se encontró que el 34 % de la población tenía necesidades básicas insatisfechas. Sé que esas cifras no son enteramente comparables a las del censo del año 1985 y a las del año 1996 porque las dimensiones específicas con que se miden son distintas, pero tampoco nadie puede comparar mi funcionalidad hepática o cardíaca con la que tenía a los cincuenta años, y se mide con los mismos indicadores. Entonces, si bien no son perfectamente comparables, son reveladoras de una realidad de necesidades básicas insatisfechas.

Y quiero agregar más: el Ministro Olesker, en un acto de enorme franqueza y confianza para con el Parlamento, el día 7 de mayo concurrió a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores, e informó que había realizado un estudio sobre derechos básicos no satisfechos, siguiendo una metodología del Coneval que fue desarrollada en México –ese estudio se realizó pero nunca se hizo público–, y que según el mismo, el 49 % de la población uruguaya, según el censo del año 2011, tenía alguna de esas carencias críticas sin satisfacer. O sea que estamos entre el 34 %, medido por el INE, según necesidades básicas insatisfechas, y el 49 % de la población total, medido según la metodología del Coneval.

La conclusión que se saca es que si el indicador de necesidades básicas insatisfechas del año 1985 era de 28 % y el de diez años más tarde, de 1996, era de 37 %, haberlo bajado a 34 % luego de una cantidad de años de gran crecimiento económico no es ningún mérito particular y no está reflejando ningún cambio esencial en la situación social del Uruguay. Por eso es que estoy hablando de que acá hay una concepción

ideológica y los indicadores están marcando el fracaso de esa concepción, que además se ve acentuado porque hay un cambio metodológico muy importante en la medición de las personas por debajo de la línea de pobreza entre los años 2004 y 2011. En el año 2004 no se incluían las transferencias monetarias, no se incluían en los ingresos del hogar las transferencias por Fonasa, cosa que sí se hace en 2011. O sea que esos dos indicadores no son comparables. A lo que quiero llegar es a que no solo el panorama no es tan bueno, sino que es frágil, como indica muy bien la licenciada Carmen Midaglia en ese informe que hizo a solicitud del Mides, al que hizo referencia el Legislador Alonso, que fue puesto en la página web de Presidencia y retirado a las 24 horas. ¿Qué dice? Que hay un 14 % de la población que se considera de clase media, pero que ante la menor crisis cae nuevamente en situación de pobreza: 13 % más 14 %, da 27 %. ¿Sabe qué, señor Presidente? Estamos a las puertas de una crisis económica, porque está bajando el nivel de actividad, está aumentando la tasa de desempleo, tenemos dificultades de competitividad debido al valor del tipo de cambio, y vamos a tener que recurrir muy rápidamente a transferencias condicionadas para que esa población que ya está en situación de pobreza no caiga en situación de indigencia.

Yo quiero hacer un llamado de atención, porque el Gobierno, más que vanagloriarse de las cosas buenas que hizo –que las hizo–, lo que tiene que pensar es cómo va a enfrentar las cosas que vienen, que son bastante oscuras.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Legisladora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: la verdad es que quince minutos es poco, pero trataremos de aprovecharlos lo más posible, porque he escuchado cosas maravillosas acá, que realmente me conmueven. Como soy veterana, he escuchado durante mucho tiempo discursos de los partidos, ahora de oposición, cuando eran gobierno.

Lo primero que me gustaría decir es que escuchamos atentamente la exposición que hicieron el señor Ministro y su equipo, y acá no hubo ninguna exposición eufórica. El mismo discursito pretendieron hacer cuando compareció el señor Ministro de Educación y Cultura, Ehrlich, como de que batíamos el parche de que lo nuestro era divino. ¡No fue así! Si se repasara lo que se acaba de alabar, que es la presentación que hizo el Ministro en diapositivas, se podría apreciar que tiene una fuerte visión autocrítica y de corrección permanente, porque esta es nuestra lógica. Nunca intentamos tapar el sol con el dedo; sí estamos en permanente reflexión, atendien-

do a la realidad y corrigiendo las cosas. Igualmente, en cierta medida, me alegro de que sea innegable que la pobreza haya bajado, ¡me encantó! Porque si hubiera la más mínima duda, ¡ya nos encajaban no sé cuántos millones de pobres también! Por suerte, es tan bueno el trabajo que es innegable que la pobreza disminuyó en estos períodos de gobierno de la izquierda, cosa que no sucedió en administraciones anteriores.

Cuando acá se votó –como decía mi distinguido colega, el señor Legislador Abdala, que levantaron sus manos para votarla– la creación del Ministerio de Desarrollo Social, recuerdo claramente los discursos acerca de que era la cantera del clientelismo de la izquierda, que íbamos a hacer lo que ahora se reafirma. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Legislador Solari: lo que tenemos acá son profundas diferencias ideológicas. ¡Viva la democracia! ¡De eso se trata! Tenemos profundas diferencias ideológicas, y a las pruebas me remito.

El señor Legislador –creo que con justa razón– dice que una de las políticas importantes de inclusión es el empleo. El desempleo supo ser del 16 % –no en nuestra Administración– para llegar a un poco más del 6 % en la actualidad. Por lo tanto, creo que algo se hizo en esa materia; nadie bate el parche; nadie ha dicho, desde ningún estamento de esta fuerza política, que hemos hecho todo lo mejor y que ignoramos lo que se hizo en el pasado. Me parece que hay una tendencia fundacional en ese sentido. Ahora, los portadores de la verdad y del desconocimiento de algunos de los logros parecen ser la oposición. No está correcto; no es correcto mirar así, porque durante mi período de oposición fui permanentemente llevada a la realidad al decir: ¡Haga propuestas! ¡Sea responsable! Y ahora, resulta que se dio vuelta el papel y se nos olvidó la exigencia de cuando éramos gobierno.

Me parece que ha habido altísima responsabilidad en esta Administración y en la anterior, en todo el gobierno freteamplista. Nos metimos con el casco duro de la pobreza, y cuando se nos decía que en el Plan de Emergencia le íbamos a dar plata sin contraprestaciones a los incultos que se la iban a gastar en vino, ahí está la diferencia ideológica, ahí salta lo que en realidad se piensa de determinados sectores sociales.

Creo recordar que acá hubo hasta propuestas de poner baños para limpiar a la gente y cortarle el pelo. Esa es la posición que se mantiene, de grandes diferencias ideológicas, por supuesto, pero no he escuchado acá que alguien haya dicho: “Es un éxito rotundo; terminaron con los graves problemas”. La exclusión es un problema gravísimo que se arrastra desde hace mucho tiempo, porque hace mucho tiem-

po se favoreció la exclusión de muchos sectores, y la exclusión no está solamente determinada por niveles de ingresos o niveles económicos; es muchísimo más compleja. La exclusión se sigue subrayando cuando seguimos manteniendo el estigma hacia las poblaciones más pobres, tal vez no en esta Sala, porque no es políticamente correcto, pero fuera de ella, donde se impulsa ante la población que a la gente le seguimos regalando cosas que no valora, y ahora se nos dice que hacemos política asistencialista.

¡Por favor! He escuchado un informe en el que se ha hablado claramente –no lo voy a repetir, porque supongo que el señor Ministro lo va a aclarar, ya tal vez se entendió mal– de políticas concretas de inclusión de jóvenes, tanto en el sistema educativo, como en el mercado laboral. Esas son políticas de inclusión. ¿Desde qué lógica? Es lo que a mí, como mujer de izquierda, más me satisface: desde la lógica de la cercanía y el acompañamiento. No se trata a todos igual, porque, de esa manera, lo único que se logra es profundizar las iniquidades.

Esta fue una enorme corrección que realizó el Ministerio de Desarrollo Social, porque tenemos capacidad de autocrítica, porque no miramos para el otro lado, porque no ponemos la cabeza en el agujerito, como el avestruz; miramos la realidad y cambiamos la estrategia. Tuvimos que ir a una estrategia más de cercanía y de diferenciación de las políticas para atacar a aquellos lugares que todavía presentan graves problemas y que los van a seguir presentando, pero estoy absolutamente segura –daré la lucha para eso– de que en el Gobierno seguirá la izquierda de este país, y vamos a seguir progresivamente aminorando los problemas sociales que siguen teniendo muchos uruguayos.

Estas cosas no se deben al pasaje de extraterrestres por este país; son consecuencia –no me voy a referir a ellas, porque me parece antiguo ponerme a decir verdades obvias– de opciones políticas que se tomaron en su momento. No es que vino alguien de Plutón y cambió el mundo; son opciones políticas que tuvieron consecuencias y estamos remando para cambiar. Siempre bien, siempre con éxito. ¿Hemos dicho eso nosotros? No. Hemos hecho los ajustes y los reconocimientos que hay que hacer a aciertos que en otros momentos no se daban.

Cuando discutimos el tema educativo, hablamos de la importancia –nuevamente, hoy lo trae en cifras el señor Ministro– de aplicarnos como objetivo, como gran desafío, trabajar sobre la primera infancia. ¿Lo inventamos nosotros? ¿Lo iniciamos nosotros? No; también reconocimos que el tema de la atención de la primera infancia y los CAIF no arrancó con nuestro Gobierno. Sin embargo, fuimos capaces de seguir poniendo presupuesto y profundizando, y queremos ir a

más. Hoy, la cobertura es enorme, y tiene que ver con inclusión y con calidad de vida. El Fondo Nacional de Salud también tiene que ver con la inclusión; y fue una medida nuestra.

¿Todavía tenemos problemas, señor Presidente? Sí; los tenemos, pero hemos hecho mucho. Sin lugar a dudas, estoy convencida de que en estos períodos de Gobierno se han hecho los mayores esfuerzos en la historia del país para lograr la inclusión de enormes sectores de ciudadanos uruguayos, de niños, niñas y adolescentes que quedaban por fuera de toda cobertura, por fuera de toda red de contención social, porque de lo que estamos hablando acá no es de asistir de por vida a nadie, sino de dar oportunidades, y creo que en ese sentido hemos trabajado.

No admito que se hable de asistencialismo en las políticas nuestras. Creo que hemos intentado –y seguiremos haciéndolo– dar oportunidades para que puedan hacerse con un proyecto de vida, pero sin redes de contención, en la más absoluta pobreza, sin nada que llevar a la mesa, no es posible. Cuando llegamos al Gobierno, encontramos enormes bolsones de pobreza que ni siquiera estaban medidos, porque, hasta 2005, se medían los centros poblados de 5.000 habitantes o más, y cuando fuimos a ver las pequeñas poblaciones, era muchísimo mayor el porcentaje de pobres que existía en este país. Era realmente horrible.

Se ha demostrado –lo ha demostrado con números el señor Ministro durante esta y todas las comparecencias anteriores del Ministerio de Desarrollo Social– cómo hemos ganado en inclusión, cómo hemos equiparado capacidad de derechos, o sea, cómo hemos garantizado ciudadanía y cómo tratamos de impulsar que las personas sigan desarrollándose, porque creemos en su potencia, no como otros. Nosotros apoyamos a esos sectores de la población, tratamos de comunicarnos, no estigmatizamos, no creemos que es gastar pólvora en chimangos; creemos que es garantizar derechos y ciudadanía a todos por igual, y no que dar a todos igual es ganar en equidad; eso es ganar en discriminación.

Hemos demostrado, con todos estos programas con los que informó hoy el señor Ministro, cuál es esa política de cercanía y de acompañamiento. ¿Estamos satisfechos? ¿Llegamos al total? No. Si bien reconozco la honestidad del planteo y no estoy criticando para nada –cada uno tiene posición en este tema y yo la respeto–, no lo puedo avalar. Como integrante de esta fuerza política y de este Gobierno, no puedo avalar que se hable de fracaso de las políticas sociales. ¡Por favor! Acá cada uno lee lo que quiere.

¿Qué no es la maravilla de las maravillas? ¡Muy bien! ¿Qué la oposición tiene mucho que aportar? ¡Sensacional! ¿Qué la oposición tiene una posición crítica? ¡Muy bien! Así camina una democracia, pero ponerse el balde y no reconocer absolutamente nada diciendo que es un fracaso, me parece que es una mirada muy miope –no tengo nada contra los miopes; soy hipermetrope– y bastante interesada.

Sinceramente, con la honestidad total que caracteriza a la fuerza política, el señor Ministro y su equipo han venido una y mil veces a plantear avances, problemas y desafíos. Nadie viene acá a decir que esto es maravilloso, pero no podemos aceptar la otra lectura: “Esto es todo un fracaso”, “Esto es todo un desastre”. No es así, y no puedo avalarlo; lo digo con el mayor de los respetos.

Como gran defensora de esta Casa, del Parlamento, del intercambio libre de ideas y como integrante de esta fuerza política y de este Gobierno, no puedo aceptar que todo ha sido un fracaso, porque lo que acaba de informar el señor Ministro, en esta oportunidad y en las anteriores, da por tierra con calificaciones que no se ajustan para nada a la realidad.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: la señora Legisladora preopinante, como es habitual en ella, ha hecho un aporte constructivo al debate, más allá de las diferencias o de los distintos puntos de vista que podamos tener en este tema o en otros. Sin embargo, me veo en la obligación de hacer nada más que algunas aclaraciones.

(Ocupa la Presidencia el señor Legislador Baráibar).

–En primer lugar, nosotros jamás hablamos, ahora ni antes, de clientelismo político a la hora de la creación y concepción del Ministerio de Desarrollo Social, que acompañamos con mucho gusto en 2005; tampoco introdujimos el concepto en este debate porque, reitero, me parece que lo hemos dado por lo alto y con sentido crítico y autocrítico. Sí hablamos de la euforia en términos de que deberíamos prevenirla a la hora de abordar esta discusión, y queremos explicar por qué. En primer lugar, por el propio planteamiento de la convocatoria: si la Bancada de Gobierno, con toda legitimidad, convoca al señor Ministro de Desarrollo Social para que exhiba los resultados de la reforma social, naturalmente, uno podría inferir que venimos

nada más que a escuchar buenas noticias y no autocríticas. Esta preocupación se vio reforzada por el tenor del planteamiento de la convocante o de quien ofició en esa condición, que, si bien lo hizo legítimamente en algún sentido, nos preocupó que todo lo que escucharíamos sería un lecho de rosas.

Entonces, me alegra que este debate vaya tomando otro cariz y que el propio Gobierno admita que ha obtenido resultados positivos, pero que está muy lejos de alcanzar el final del camino, porque en esa conclusión nosotros, por cierto, vamos a coincidir, como también lo haremos en la medida –creo que se desprendió de las palabras de la señora Legisladora preopinante– de que nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social ni de los resultados sociales, inclusive, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad

Pertenezco a un partido político que gobernó en la década de los noventa y, por cierto, nos sentimos muy cómodos a la hora de hablar de los índices de pobreza y de los relacionados con la distribución del ingreso, entre otras cosas, porque en 1990 recibimos el país con 657.000 ciudadanos por debajo de la línea de pobreza y terminamos nuestra gestión con 356.000; la bajamos a la mitad. Sin duda, esto fue una continuidad de los gobiernos democráticos a partir de 1985.

El Índice Gini, que mide la concentración del ingreso o bien la distribución de la riqueza en Uruguay, en el Gobierno del Partido Nacional se redujo sensiblemente; hubo un combate eficaz a la concentración del ingreso. En el Gobierno del doctor Vázquez aumentó la concentración del ingreso y, sin duda, disminuyó en el Gobierno del Presidente Mujica. Ahora: esto no es blanco o negro; naturalmente, admite tonalidades y, sobre todo, nos demanda una gran objetividad, porque, si no, venir acá –no estoy aludiendo a nadie, menos a la señora Legisladora Tourné– a enjuagar nuestras conciencias o a ser autocomplacientes –por suerte, de acuerdo con el desarrollo de este debate, no es el talante de nadie; espero que tampoco del señor Ministro, porque no lo fue en su intervención inicial– sería hacernos trampas al solitario, sobre todo, ser hipócritas con nosotros mismos y con la sociedad de la que formamos parte y que se supone representamos políticamente.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Baráibar).- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: en primer lugar, creo que es importante recordar que cuando el Frente Amplio ganó las elecciones, una de las prime-

ras medidas que adoptó fue crear un Ministerio para abordar este problema, porque no existía; el problema existía, pero el Ministerio no. Su creación fue votada por todos los partidos políticos, y también, como se ha dicho, muchas herramientas que el Ministerio implementó. Me parece que esto fue bueno para el país.

Este Ministerio tuvo que desarrollarse institucionalmente desde cero, porque no había nada, ni siquiera funcionarios. Digo esto, porque, muchas veces, se habló del crecimiento de la plantilla de empleos públicos, de los cargos de confianza y todas esas cosas; estas son las actividades que nuestro Gobierno comenzó, que antes no existían y que precisan gente trabajando.

Mucho trabajo inicial del Ministerio de Desarrollo Social fue voluntario, estudiantes universitarios de buena voluntad que se pusieron a colaborar. Inclusive, estas cosas requieren una larga evolución, y vaya si lo sabemos, porque cuando se discute el Presupuesto y las Rendiciones de Cuentas en el Parlamento, algunas delegaciones vienen a pedir tan solo que sus cargos sean regularizados, y quizás algunos de los funcionarios que integran el equipo que asesora al señor Ministro y que están presentes estén en esta situación. Esta es la construcción paulatina de herramientas para enfrentar un problema de larga data.

En segundo término, quiero referirme a otro aspecto del informe del señor Ministro. El Sistema de Información Integrada del Área Social, que integra y permite compartir las mismas bases de datos al Ministerio de Desarrollo Social, al Banco de Previsión Social, a ASSE, al Ministerio de Salud Pública y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y ahora se están incorporando el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la ANEP, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Correo, no existía y era casi imposible lograrlo. No estoy criticando a nadie, porque esto no es de izquierda ni de derecha, pero ¿cómo se puede tener políticas coherentes en áreas multidisciplinarias con ranchos aparte, cada uno con sus lógicas y datos que no puede compartir ni intercambiar? Quizás estas sean las piedras que hay que poner en los cimientos.

Quiero jerarquizar la importancia de contar ahora con toda esta información, porque es la que nos permite evaluar lo que hacemos y mejorar.

Estoy muy lejos de vanagloriarme; hay mucho trabajo por delante. Algunas cosas van bien, y si una persona deja de tener hambre, mi corazón se alegra, y si son miles, me identifico mucho más, tal vez porque yo provengo de ahí. Es horrible que una persona tenga hambre y no tenga para comer. Si el sistema

político logra encontrar las herramientas para sacar tan solo a una persona del hambre, nos tiene que alegrar a todos, y me consta que a todos los que estamos acá nos alegra.

Mi intervención no es para atacar a nadie; francamente, no ganamos nada peleándonos entre nosotros.

Me satisface que en la franja de más bajos ingresos, tres de cada cuatro ciudadanos reciba la tarjeta Uruguay Social y que en esa franja la desocupación haya disminuido del 30 % al 19 %.

No quiero entrar en una discusión en cuanto a si la mejor política social es el trabajo o el acceso a lo que brinda el sistema. En realidad, todos sabemos que la política social avanza cuando hay mayor bienestar en la ciudadanía.

Creo que el hecho de que la indigencia y la pobreza hayan disminuido, más allá de los números y de cómo se medía antes y cómo se mide ahora, es muy bueno. Esos son los derechos de los nuevos uruguayos. Creo que para eso estamos nosotros acá.

Lamentablemente, la sociedad uruguaya tuvo que gastar en esto. ¡Ojalá no hubiera sido así! Es una pena que los uruguayos hayan tenido que aportar para poder enfrentar este problema! Pero esa fue la lógica de los hechos. Así evolucionó el país. Hubo algunas voces en el sentido de que había que recortar los gastos realizados con este fin: me parece que acá eso no se ha planteado; todos lo estamos apoyando.

Estamos hablando de datos duros, difíciles de cambiar. Esto no se arregla sacándole al de arriba y dándole al de abajo; estoy de acuerdo. Este es un problema estructural; no se arregla con los programas del Mides, cuyos resultados en los dos últimos años el señor Ministro nos presentó. Los resultados son positivos, pero me parece que es necesaria una visión de políticas sociales a largo plazo. Sin embargo, este tema no está en la agenda. ¿Cuáles son los grandes problemas de Uruguay? Nadie dice que este es uno de ellos. Por eso, decidimos convocar al Ministro para hablar de un problema importante, que no lo arreglan ni uno ni dos Gobiernos: lo arregla un proceso, lo arregla un país.

Me pregunto: ¿todo está mal? Cuando las cosas estuvieron muy mal en este país, hubo cambio de Gobierno. Fue en 1957 y en 2004. Hubo cambios, porque las cosas estaban mal, la gente se hundía. No quiero discutir las causas, porque no sirve para nada.

Lo que veo es que, ahora, muchos tienen trabajo. Eso fue, en parte, por las políticas sociales y económicas, por los estímulos a la inversión, por la definición

de las cadenas productivas y las políticas activas y por el mercado.

Ahora bien, el mercado, la economía, son esenciales. A largo plazo, estas cuestiones deben ser arregladas por la economía, pero hay que tener en cuenta que si la economía es un sistema que produce desigualdad, esa desigualdad llevará a la discriminación, al desempleo y a la injusticia social. En realidad, creo que tenemos que pensar cómo podemos lograr que el mercado funcione en forma estable y genere puestos de trabajo, que los empresarios midan el riesgo en sus decisiones, para que después no tengan que pedir a la sociedad que les arregle sus problemas, para que no suceda lo que ahora está pasando en buena parte del mundo y nosotros sufrimos los coletazos. Cuando los bancos no miden sus riesgos y, después, los países tienen que subsidiarlos –como es el caso de Estados Unidos y de algunos países de Europa–, precisan transferencias de la sociedad.

Creo que el mercado no es lo que dicen los libros. El mercado es lo que pasa todos los días. El mercado no es eficiente por sí mismo. No puede haber desocupados con necesidades básicas insatisfechas y, a la vez, recursos subutilizados, suelo que no se utiliza, inversiones en equipos e inversiones industriales que no pueden utilizarse. No puede haber viviendas vacías y gente que necesita un hogar. Al mercado hay que buscarle la eficiencia; no es justo por sí mismo.

Creo que este es un problema ideológico. Hay algunos que piensan que el mercado por sí mismo va a producir las soluciones. ¡El mercado, en ciertas condiciones, produce el problema! Eso fue lo que pasó aquí, en nuestro país.

El crecimiento es necesario, pero hay que tener en cuenta el concepto del reparto de la torta, que hoy no es uno de los temas que tenemos que discutir. Si el crecimiento es muy grande, la torta hasta puede repartirse peor. Si el 1 % –por decirlo de manera gráfica, en el lenguaje de Stiglitz– sigue acaparando y sigue concentrando riqueza, en realidad, el crecimiento no sirve para nada si lo que se pretende es una sociedad de bienestar. Solo habrá bienestar para quienes tienen más capital.

Por suerte, en nuestro país, el Índice de Gini bajó 12 %. Tenemos uno de los Índices de Gini más bajos, inferior al de Estados Unidos y de otros países de la región, que lo han bajado mucho. Por ejemplo, Brasil, con sus políticas, lo bajó mucho desde el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso y más aún en el Gobierno de Lula.

Creo que la sociedad y la política, deben domesticar el mercado. El mercado no puede quedar suelto; si queda suelto, es un factor de producción de des-

igualdad. A muchos no les gusta esto; al 1 % no le gusta, porque son los que se benefician con los frutos de sus actividades económicas. A mi juicio, el mercado debe estar sometido a la exigencia de que tiene que funcionar en beneficio de toda la sociedad.

En los libros de economía se menciona un pensamiento de Alexis de Tocqueville, un francés que se fue, al que le pidieron que hiciera alguna reflexión sobre cómo veía la economía norteamericana. Él comparaba la economía norteamericana con la economía europea. Esto pasó hace muchos años pero, para mí, es demostrativo de una idea muy importante, de esas ideas permanentes, que nunca pierden vigencia. Él se preguntaba qué es el interés propio. Decía que, muchas veces, para un empresario europeo, el interés es: “Yo quiero lo que es bueno para mí ahora”. Y había leído que en la economía norteamericana naciente, aquellos inmigrantes laboriosos tenían una filosofía distinta. Él decía que el interés de todo el mundo, el bienestar común, es una condición para nuestro propio bienestar.

Lo había aprendido estudiando la mentalidad de aquella economía que estaba comenzando. Esto es muy bueno para el alma: concebir el mejor funcionamiento común. Y lo que la economía vino a demostrar es que también es bueno para los negocios, porque una sociedad que no logra avanzar equilibradamente, en realidad, se está trazando su propia muerte. La exclusión, partir la sociedad, tampoco es bueno para los empresarios. Eso es lo que ellos tienen que entender. Aquí viene la pregunta que hoy se están haciendo los economistas en el mundo, los que se han dedicado a estas cosas, los que han hecho recomendaciones: ¿cuánto cuesta la desigualdad? ¿Cuál es el precio de la desigualdad para algunos, más allá de los aspectos éticos o morales? El 1 % de la sociedad tiene casas, educación, médicos, todo un estilo de vida. Lo que en realidad se está demostrando es que la plata no soluciona el problema del bienestar, porque está muy ligado a cómo le va al 99 %.

A la larga, en la historia, esto se aprende. Esto es lo que se está sacando como conclusión hoy. Creo que la economía y la política son inseparables. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Nosotros tuvimos un período de mucho crecimiento –también hubo otros– apoyado por políticas sociales, que no implicaron solo ayudar a los sumergidos, sino también capacitar a la gente y crear empleo de mejor calidad, porque, además, hoy el mundo es distinto que hace veinte años. Entonces, ¿estamos a la puerta de una crisis? No sé. El Legislador Solari decía eso. Las crisis siempre pueden venir; los buenos momentos, también. Somos frágiles y preparémonos para hacer lo mejor. Creo que esto que estamos haciendo es muy bueno y hay que seguir haciéndolo. Sin vanagloriarnos por lo que hicimos, tenemos que seguir traba-

jando con un fortísimo compromiso para lograr una sociedad más equilibrada.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Baráibar).- Tiene la palabra la señora Legisladora Minetti.

SEÑORA MINETTI.- Señor Presidente: después de escuchar la exposición del señor Ministro y de los señores Legisladores se desprende que hay grandes diferencias ideológicas e, inclusive, conceptuales.

(Ocupa la Presidencia el señor Legislador Agazzi).

–Quiero señalar que como política siempre he sido muy respetuosa de lo que expresa cualquier persona, que puedo compartir o no. Con lo que no estoy de acuerdo, y lo digo con mucho respeto, es con que se me subestime, porque yo jamás subestimo a nadie.

Quienes están en este recinto o alguien que haya escuchado las exposiciones o que luego tenga acceso a la versión taquigráfica podrán evaluar si mi discurso fue bueno o malo o compartirlo o no, pero lo que no se puede decir es que yo hice un planteamiento color de rosa o que vine a hacerle el mandado al señor Ministro de Desarrollo Social o al Gobierno; todo lo contrario. En mi exposición una de las cosas que dije es que lamentablemente hemos tenido que aplicar políticas sociales y de asistencialismo. Y digo lamentablemente porque ojalá cuando mi fuerza política empezó a tener responsabilidades de gobernar este país las cosas hubieran sido diferentes. Pero no es así.

Lo que yo di fueron datos totalmente objetivos que, repito, cualquier ciudadano puede acceder a ellos, y que el señor Ministro profundizó. Somos seres políticos, estamos en un ámbito político, y es válido que las cosas se usen de una forma o de otra.

Cuando dije que la pobreza no se mide por ingresos económicos solamente, es cierto. Pero, desgraciadamente, nosotros tuvimos que medirla por ingresos económicos porque teníamos prácticamente cuatrocientas mil personas pasando hambre, y hubo que hacer un plan de emergencia. Además, esa gente no tenía ingresos económicos. A nuestro pesar, hubo que dar asistencia a esa parte de la población. Mi compañera, la Legisladora Tourné, y también el señor Presidente dijeron que no estamos contentos con esto. ¿De qué vamos a estar contentos? ¿Vamos a estar contentos de que tuvimos la obligación de asistir –que es nuestra responsabilidad– a una parte de la población con estas políticas sociales? No. Ahora bien, no se nos puede decir que hicimos favores políticos. Las canastas de antes sí eran favores políticos. En cualquier pueblo o localidad se le daba una canasta

a quien respondía al Gobierno de turno. Acá no. Acá las tarjetas, como se explicó, se dan luego de una evaluación; es decir, se evalúa a quien tiene que recibir esa prestación. Eso es lo que se hace y lo que debemos hacer.

Se habla de que no hay inclusión social. Mi madre siempre decía que las cosas son según el cristal con que se miren. Cuando ingresamos al Gobierno hace ocho años teníamos una zona rural totalmente excluida, pequeños productores dueños de su campo muriéndose de hambre y el señor Presidente sabe que eso es así. Las mujeres rurales parían sus hijos sin atención médica porque no tenían medios económicos. Ante esta situación, intervinieron varios actores del Gobierno: los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Desarrollo Social, de Trabajo y Seguridad Social, el BPS, etcétera. Nosotros les pedimos a esos pequeños productores que se organizaran. Para ello, llevamos a las organizaciones rurales un grupo de técnicos pagados por el Gobierno. Pero no solamente fueron ingenieros agrónomos o veterinarios quienes integraron ese equipo, sino también psicólogos, asistentes sociales, médicos de familias, etcétera. Además, se construyeron consultorios rurales. ¿Eso no es inclusión social? ¿No es una buena política social? Reitero: las cosas son según el cristal con que se miren y según el concepto que se tenga de lo que es una política social. Si una política social es beneficiar a un individuo porque nos vota, es respetable, pero yo no lo comparto. No me pueden decir que las personas que tuvimos que asistir y que son beneficiarias de todos estos programas –que ya ilustré, pero que lo hizo con más propiedad y capacidad el señor Ministro– son todas frenteamplistas. No, señor Presidente. ¡Por favor!

Es cierto que había padres o cuidadores que cobraban asignaciones y pensiones por discapacidad de menores y de adultos mayores –hay que acordarse de eso; es bueno que el pueblo tenga memoria–, pero no tenían los servicios necesarios porque no se los obligaba a que les dieran lo que debían darles. Hoy no es así. Es verdad que se asiste económicamente, pero como dijimos anteriormente, esos padres o cuidadores están obligados a que esos niños tengan cobertura médica y estén integrados al sistema educativo. ¿Eso no es una política de inclusión social? Yo creo que sí, aunque pensar lo contrario es respetable.

Se dice que hay ciudadanos que no tienen las necesidades básicas satisfechas. Eso puede ser cierto, pero no olvidemos que cuando se hace esta mención se habla de ciudadanos que viven, por ejemplo, en Ciudad de la Costa, donde no hay saneamiento. No lo vamos a ocultar. Es más –sin ofender a nadie–: Carrasco tampoco tiene saneamiento. Por lo tanto, los ciudadanos que viven en Ciudad de la Costa o en Carrasco, que por lo general tienen un ingreso

respetable, tienen una necesidad básica que todavía no ha sido contemplada. Es cierto. Durante décadas –también en la década del noventa y lo digo con mucho respeto–, las personas más vulnerables fueron desplazadas y excluidas por las políticas económicas y sociales aplicadas en ese momento. Entonces, después arrastramos el lastre, tal como dije anteriormente. Lamentablemente, hubo y sigue habiendo personas rezagadas, porque no es fácil crearles una cultura en ese sentido y hacerles saber cuáles son sus derechos; no es fácil inculcarles que tener una vivienda digna forma parte de sus derechos, que tener un baño en sus viviendas, bañarse todos los días y comer todos los días –cada individuo y sus hijos– también lo son. Esto cuenta, porque esa gente estaba entregada a la mano del Señor; es así, porque esa es la cultura que le inculcamos: “Cuando quiero te doy algo y cuando no, te lo saco”. Ahora no es así, señor Presidente, aunque hay que seguir trabajando en eso. En realidad, los ciudadanos deben saber cuáles son sus derechos, al igual que los niños. Digo esto porque anteriormente cuando los niños eran castigados por su padre, no pasaba nada –eso lo sabemos todos–, pero ahora no es así, porque ser padre no es ser dueño de esa vida. Que quede claro: por ser padres tenemos la responsabilidad de criar, educar y formar a nuestros hijos, pero para que sean seres libres, independientes y pensantes. Por lo tanto, no se puede castigar a un niño solamente por ser su padre. Esos son los derechos que debemos considerar y que no solo fueron legislados por el Frente Amplio.

Por supuesto, algunos aspectos ya están legislados y se manejan a nivel mundial; el problema es que no se aplican como, por ejemplo, la política de derechos humanos. Sin duda, nosotros no elaboramos dicha política, simplemente la aplicamos, porque debemos hacerlo.

Por otro lado, estoy convencida de que hemos transitado por todos estos programas con responsabilidad de país, de Estado; además, todos deben ser beneficiarios de lo que estamos creando, que son políticas de inclusión social, le guste a quien le guste; se podrán compartir o no, pero se trata de políticas de inclusión social.

Para terminar, quiero agradecer al señor Ministro y al señor Subsecretario de Desarrollo Social, y a todo su equipo por la información brindada. Realmente, los datos suministrados han despejado alguna de nuestras dudas, y sé que el señor Ministro concurrirá al Parlamento cada vez que se lo convoque, tal como ha sucedido en otras oportunidades.

De todos modos, como dijo el señor Ministro, seguiremos monitoreando y evaluando esos programas, ya que tenemos la capacidad de corregir lo que se ha

hecho mal o no arrojó los resultados esperados a pesar de haberse hecho con la mejor intención.

Solo me resta agradecer nuevamente la presencia del Ministerio de Desarrollo Social.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: la Legisladora preopinante hizo una afirmación muy fuerte que, en lo personal, en cierta forma me agravia.

La señora Legisladora afirmó que durante la década del noventa los beneficios sociales se daban a voluntad del gobernante y no por derecho del ciudadano, y que este último no tenía conocimiento de dichos derechos. Si entendí mal, pido disculpas, pero fue lo que entendí y anoté.

Como es notorio, fui Ministro de Salud Pública durante 1990 y 1991 y desde 1995 a 1997, y en ese entonces todos los pacientes de ASSE, de las instituciones de asistencia médica colectiva y de los seguros privados conocían sus derechos y los usufructuaban, y en caso de no poder hacerlo, las puertas del Ministerio estaban abiertas para que pudieran plantear sus reclamos. De manera que en lo que me corresponde como gobernante de esa época, y en lo referido al sistema de prestación de servicios de salud, debo decir que la afirmación que se hizo es incorrecta.

Por otro lado, quiero agregar que en este período –eso no tiene que ver con la buena voluntad del actual Gobierno, sino que hace a la situación de las cosas– el Banco Mundial realizó un estudio sobre el conocimiento que las beneficiarias de las nuevas leyes de Asignaciones Familiares tenían de sus derechos, y se concluyó que cerca de un 40 % de las potenciales beneficiadas no los conocían. Por lo tanto, era difícil que los pudieran usufructuar.

O sea que no era ni tan tan en aquel momento, ni tan poco ahora.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL.- Señor Presidente: en mi última intervención no voy a referirme a los programas del Ministerio porque ya fueron reseñados extensamente, sino que voy a señalar algunas de las preguntas o reflexiones que se hicieron vinculadas al conjunto de las políticas implementadas.

De todos modos, antes de ello, quisiera hacer algunas aclaraciones.

El informe Coneval sobre distribución del ingreso fue publicado en la Rendición de Cuentas de 2011, en la página 56. Allí están los resultados, que comparan el año 2006 con 2011, donde figura que el 70 % de la población no tenía todos sus derechos cubiertos y sí el 30 %; ahora no lo voy a explicar porque es algo extenso y el señor Legislador Solari ya lo hizo.

Sin embargo, quiero decir que la metodología Coneval mide derechos, y en 2006 se encontró que al 70 % de la población no le llegaba alguno de esos cinco derechos, que es a lo que se hizo referencia. Sabemos que la metodología utilizada en lo relativo a los derechos es discutible, pero nosotros la hemos tenido en cuenta. Asimismo, en el año 2011, ese porcentaje era del 50 %, y los compañeros de Dinem ya están trabajando en la actualización de 2013. Solo quiero aclarar que no es verdad que ese dato nunca haya sido aplicado. Reitero: figura en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas del año 2011.

Por otro lado, quiero decir que me resultó un poco extraña la referencia al informe de la Dinem 2009-2010, porque ya fui interpelado por ese informe, cuando recién había asumido como Ministro de Desarrollo Social. En realidad, entiendo que la mayoría de las cosas que expuse en el día de hoy –que figuran en el informe correspondiente a 2012-2013– demuestran que se revirtieron algunos de los problemas principales que detectaba dicho informe y que el señor Diputado Abdala mencionó, como la focalización, el solapamiento, la fragmentación y la difusión de la población objetivo de los programas. Y lo que muestra este informe es que esos cuatro temas –la interpelación se centró en ellos, ya que nosotros mismos habíamos manifestado nuestra preocupación por esos problemas– están resueltos.

También quiero aclarar que el informe tiene tres años, y no uno, tal como se dijo, que mide 2009 y 2010, y fue publicado en setiembre de 2011.

Por otra parte, quiero decir que quizás sea eufórico cuando hablo, pero no con los resultados. De hecho, si se repasa la versión taquigráfica se podrá advertir que en varios momentos realicé una fuerte autocrítica sobre las cosas que falta hacer. Creo que la virtud que tenemos –y tiene nuestro Gobierno– es

que nuestra brújula apunta en una dirección, pero sabemos que entre el momento en que estamos y el final, como lo dice Erik Olin Wright en su libro *Los puntos de la brújula: hacia una alternativa socialista*, queda mucho camino por recorrer. Pero cuando uno mira para atrás y compara, sin duda, ve muchos resultados, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. De hecho, el principal informe sobre la situación crítica del 5 % de la pobreza estructural y las necesidades básicas insatisfechas –a lo cual hizo alusión el señor Legislador Abdala– fue realizado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Por otro lado, tampoco creo que la virtud de este período de Gobierno haya sido el crecimiento económico.

Entre 1990 y 1998, la economía creció 40,63 %, en ocho años. Durante el período 1974-1982 –también en ocho años, en este caso, durante la dictadura–, la economía creció 37 %; durante 2005-2013, 50 %. Es verdad que 50 % es más que 41 % y que 37 %, pero es una diferencia marginal en relación con la generación de recursos. No es verdad que este fue un período excepcional de crecimiento económico, que nunca se había tenido antes. Eso no es verdad. ¿Qué es diferente en este período? Que no hubo ciclos. Nosotros hemos roto la teoría de los ciclos, según la cual cuando hay un impacto internacional negativo, la economía cae. Si uno mira, año a año, va a ver que, efectivamente, en 2009 se creció menos que en los otros años: 2,2 %. Sin embargo, se creció, a pesar del impacto de la situación internacional de 2008. En cambio, en 1995, se cayó 1,5 % como consecuencia del llamado «efecto Tequila», de 1994. O sea, la diferencia está, básicamente, en la manera en que se administra el crecimiento y en que se genera la famosa política anticíclica, para que la economía crezca aun cuando haya impactos negativos. Obviamente que una economía abierta como la uruguaya va a crecer menos cuando hay impactos negativos; eso está en la tapa del libro. Pero, en 2009 no dejó de crecer, a pesar del impacto fuertemente negativo –del viento de frente, como se suele decir– ocurrido en el año 2008.

Ahora bien, en esa relación entre el 50 % de crecimiento entre 2005 y 2013, y un 41 % entre 1990 y 1998 –excluyo el año 1999, aunque si lo incluyera los resultados serían más favorables a mi comparación, pero no lo hago porque ese año, inclusive ya en 1998, la economía dejó de crecer– empiezo a observar otros resultados. La tasa de desempleo entre 1990 y 1998, con un 40,63 % de crecimiento –41 %–, pasó de 8,5 % a 10,1 %. O sea: creció el desempleo. No es verdad que haya caído en la década del noventa: en todos esos años, solo en 1993 hubo un desempleo inferior al 8,5 %; eso ocurrió en un solo año, en todos los demás,

creció. En cambio, entre 2005 y 2012, el desempleo pasó de 13,7 % al 6,5 %.

Puedo mirar los salarios reales, que es la otra cuestión importante. Si la economía creció un 40 %, uno estimaría que un país en el que el 75 % de la población económicamente activa vive de un salario, los salarios deberían crecer por lo menos al mismo ritmo, o de manera parecida, siempre dependiendo de la productividad. En fin, no pretendo dar una clase de economía sino, simplemente, transmitir alguna inquietud.

Entonces, tomando como base el año 1990, el porcentaje de 1998 fue de 105,39 %; o sea, el salario real creció 5,39 %. Tomando como base el año 2004, hoy estamos en 54 % de crecimiento del salario real; o sea: 5 % contra casi 41 %; 54 % contra 50 %. Creo que la diferencia es bastante clara.

Podría seguir con el salario mínimo, pero voy a tomar otro ejemplo que también mencionaron los Legisladores Abdala y Solari, que tiene que ver con la formalización. En 1990, había 832.000 cotizantes al BPS; en 1998, 960.000, solo 130.000 más, pero había bastantes más nuevos empleos que 130.000. En cambio, en 2004 había 900.000 cotizantes y hoy hay 1.530.000; es decir, 630.000 cotizantes más. ¿Cuánto creció el empleo en el mismo período? En 320.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Hay 320.000 personas que estaban en negro y que ahora trabajan formalmente, registrados por la seguridad social.

Quería traer estos datos, porque me parecían importantes sumados a los que di al comienzo, sobre el gasto de ANEP, ASSE y la Universidad en los cinco Gobiernos del período democrático.

SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL.- Sí, señor Legislador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: es bueno interrumpir al señor Ministro ahora –le pido disculpas y le agradezco– porque, seguramente, después va a derivar hacia otras consideraciones.

Es bien interesante este debate. No sé en qué medida la convocatoria de hoy tiene que ver con el debate histórico pero, por supuesto, no lo rehuimos; se supone que el Ministro viene a rendir cuentas al Parlamento de lo que hizo con los poderes jurídicos y con

las asignaciones presupuestales que el Parlamento le aprobó, pero yo no quiero dejar pasar algunas cosas.

Empiezo por las coincidencias y los reconocimientos, porque nosotros tampoco nos ponemos eufóricos. En primer lugar, la formalización del trabajo es un mérito y un logro de estos períodos de Gobierno, que nosotros reconocemos. Sin ninguna duda, el incremento de los cotizantes al Banco de Previsión Social es consecuencia favorable del restablecimiento de los Consejos de Salarios; lo decimos con todas las letras y sin ambages.

En segundo término, hay que ubicar el análisis del empleo y del salario en el contexto correspondiente. El Ministro es economista –yo soy apenas un abogado–, sabe bastante más que yo de estas cosas, pero me parece que con relación al salario está comparando cosas diferentes.

En nuestro período de Gobierno hubo una evolución del salario real y del ingreso, hubo un incremento del valor real de las pasividades –se me dirá que como consecuencia de la reforma constitucional; puede ser, pero aumentaron– y, por lo tanto, ocurrió lo que yo dije antes: bajó la pobreza a la mitad y mejoramos la distribución del ingreso porque bajó la concentración del ingreso. Lo dice el Índice de Gini, que el Gobierno nacional ha introducido, en su secuencia histórica, en el Informe Económico Financiero que acompaña las Rendiciones de Cuentas.

¿Aumentó el salario real durante los gobiernos del Frente Amplio? Sin duda. Ahora bien: el Ministro compara con un período de debacle, como fue el de 2004, donde hubo una caída sideral y no como consecuencia –desde mi punto de vista– de temas estructurales, sino de la coyuntura que el país vivió después del año 2002. Creo que es bueno hacer la comparación entre la situación actual, tanto de salarios y de pasividades, con el escenario anterior a la crisis de 2002. En ese caso, se registrará un incremento del salario real, no digo que no, pero seguramente reconocerá una suerte de evolución histórica de esa modificación y no una situación de tanta espectacularidad, más allá de que advierto que –como dije– la negociación colectiva ha sido favorable en ese sentido.

En cuanto a las cifras del empleo, me remito a lo que corresponde, que es el período de gobierno que fue responsabilidad de mi partido político. Lo acaba de decir el Ministro: tuvimos un 8 % de desocupación; hubo una evolución muy favorable desde el punto de vista de la caída del desempleo y de la generación de fuentes de trabajo. O sea que, en todo caso, eso lo valoro positivamente.

Aprovecho, señor Presidente, para dejar una constancia. Del Informe de Evaluación 2009-2010, que se hizo en 2011, lo conocimos en 2012 y lo debatimos con el Ministro ese año –por eso hablé de un año; tal vez, debería haber hablado de un año y medio de transcurso de tiempo–, surgían señalamientos muy severos contra los programas del Ministerio de Desarrollo Social, hechos por la propia Dirección de Evaluación. No voy a repetir ahora los conceptos. Si esto cambió, bienvenido sea. Voy a analizar el informe que nos acaba de distribuir el señor Ministro pero, en la medida en que aquello era tan cortante y preocupante desde el punto de vista de las conclusiones –que había problema en los diseños, en la determinación de la población objetivo y todo lo que dije antes–, si cambió radicalmente será porque hubo una revolución silenciosa de la cual he venido a notificarme en el día de hoy.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL.- Voy a culminar esta primera parte diciendo, simplemente, que varios de los cambios que leerá el señor Legislador Abdala están en el informe que presentamos antes de su intervención y, además, lo he planteado en la Comisión de Población y Desarrollo varias veces, sobre todo en lo que hace a la focalización y al diseño de programas. O sea que no hay que leer el libro para verlo.

A su vez, en la página 116 del Informe de Rendición de Cuentas del año 2012 figura la evolución del Índice de Gini y, efectivamente, creció durante el período 1992-1998. No tengo los números aquí, pero quedará constancia de las dos posiciones en la versión taquigráfica y cuando se mire esa página, se verá.

Con respecto al tema de la evolución del salario, independientemente de que es verdad que el año 2004 es un punto de partida muy bajo, el salario real uruguayo hoy está en el nivel del año 1977; es decir, ha recuperado gran parte de la pérdida sufrida durante el período dictatorial. Incluso comparado con cualquier indicador previo al de 2004, claro que la diferencia no es 54 %, pero es el salario real más alto de la historia del país desde la predictadura.

Por otra parte, respecto al desempleo, yo hace muchos años realicé un estudio sobre el desempleo estructural y comprobé que entre los años cincuenta y 2004 el desempleo nunca había bajado del 8 %. Eso es lo que nosotros llamábamos desempleo estructural, es decir, aquel desempleo que, aun en las mejores condiciones económicas, no se puede superar. Nosotros lo hemos superado y hoy estamos muy deba-

jo de ese desempleo estructural: ahora, es de 6,5 %, en promedio.

Con respecto a lo que planteó el señor Legislador Abdala, no considero haber hecho una intervención institucional sin resultados específicos. Creo que traje muchos resultados específicos, y si no traje más –sepan que, de todas maneras, figuran en el documento– fue para no aburrir. Traje información sobre Jóvenes en Red, Compromiso Educativo, Formación Profesional Básica, Uruguay Trabaja, cooperativas y emprendimientos. No considero haber hecho una presentación que no haya combinado una visión integral de la política social con resultados concretos en programas concretos. Precisamente, traté de no traer resultados sobre transferencias monetarias para evitar que se quedara muy concentrada la política del Mides en las transferencias de dinero. Traje bastante material sobre programas educativos y laborales. Repito: información sobre tránsito educativo, aulas comunitarias, entre otros, se encuentra en el documento. Inclusive, el folleto abarca información sobre discapacidad y como la Legisladora convocante se refirió al tema, yo preferí no hacerlo. Allí encontrarán todas las prestaciones sobre discapacidad que se dieron, más la incorporación de los asistentes personales, que se concretará a partir del segundo semestre de este año.

Hoy aprendimos algo nuevo sobre la palabra *mito*; la verdad es que yo no conocía esa acepción. Creo que, en general, cuando la población uruguaya habla de un mito lo entiende como algo que se dice y no es verdad, independientemente de que pueda ser mejor o peor. Tal vez por eso todo el mundo la usa. De hecho, hace poco salió una cuestión sobre los mitos futbolísticos de Uruguay, y no eran todas cosas mejores que otras; algunas eran mejores y otras peores. En esa lógica es que hicimos ese documento. Cuando se dice que muchos de los que nosotros llamamos mitos se puede aducir que no son verdad, yo afirmo aquí que en algunos casos es así. Decir que aquellos que reciben tarjeta no trabajan es mentira. ¡Es mentira! Por eso nosotros salimos a desmentirlo. Y no es la primera vez que salimos a hacerlo. Inclusive, lo dijimos en oportunidad de la interpelación de la Diputada Piñeyrúa, con relación al documento de 2009 y 2010. Además, lo avalamos con encuestas de hogares y datos estadísticos. Obvio que en 65.000 hogares que reciben la tarjeta, probablemente haya alguno que no trabaje. Pero, ¡ojo! Hay población que no trabaja en todos los segmentos sociales.

De hecho, quiero decirles que la palabra *ni-ni* surgió en España para jóvenes que no estudian ni trabajan, de las clases altas, que vivían de sus padres. Después se transformó en una especie de estigmatización de los pobres que no estudian ni trabajan, pero nació ahí. Quiere decir que este es un problema

de todas las clases sociales. Rentistas que no trabajan hay en todos lados. Quienes viven de rentas tampoco trabajan: acumularon, capaz que por herencia u otra cosa, y viven de esa manera.

O sea que yo digo que los que reciben tarjeta trabajan! Eso es verdad. Quizás –y sin quizás– sus calificaciones no le permiten tener mejores trabajos y estamos tratando de ayudarlos, ¡pero trabajan!

Finalmente, quiero referirme a la discusión planteada sobre la matriz de protección social y el empleo.

De la intervención del Legislador Solari parecería que la matriz de protección social a la que me referí en la intervención periodística a que él aludió, son las transferencias monetarias. No es así. Cuando yo digo que la mejor política social se expresa en una matriz de protección social me refiero al conjunto de servicios públicos, sociales que el Estado da. Y vuelvo a los números, porque los números siempre dicen mucho. Uruguay hoy gasta US\$ 1.600:000.000 en el sistema de salud. Casi US\$ 1.000:000.000 en el prestador público, ASSE, y más de US\$ 600:000.000 en las transferencias de Rentas Generales al Fonasa, que financian fundamentalmente a aquellos cuyo aporte por ingreso –el 4,5 % o el 6 %, según corresponda– es deficitario en cuanto a la cobertura de salud que reciben, fundamentalmente los niños y los jubilados. En cambio, los trabajadores de altos ingresos –por ejemplo, los del sector bancario, los Legisladores o los profesionales–, como su aporte es superior, no solo no reciben, sino que generan un plus de hasta el 30 % por encima de su aportación y, en caso de que supere ese porcentaje, el resto se devuelve.

El sistema educativo gasta US\$ 2.500:000.000: US\$ 1.800:000.000 la ANEP, algo más de US\$ 400:000.000 la Universidad, y el resto en diferentes efectores públicos. Este año, el Fondo Nacional de Vivienda tuvo US\$ 900:000.000. Quiere decir que si sumo estos tres, y dejo de lado otra cantidad de políticas sociales, estoy hablando casi de US\$ 5.000:000.000. Esa es la matriz de protección social. Eso es lo que la Cepal vino a estudiar a Uruguay para mostrar en otros países, junto con la matriz de protección social noruega, como los dos ejemplos referentes en el mundo. Las transferencias monetarias representan US\$ 250:000.000: US\$ 60:000.000 la tarjeta y US\$ 190:000.000 las asignaciones familiares, y con otro poco del programa Uruguay Trabaja llegamos a US\$ 260:000.000, o sea, el 5 %. Cuando hablamos de la matriz de protección social nos referimos a eso.

Es verdad que hay un sector que ya salió de la pobreza, pero que todavía es vulnerable. No lo tiene que decir el informe de la Facultad de Ciencias Sociales. Lo dice la Cepal, cuando agrupa a la po-

blación de toda América Latina en población de pobreza extrema, población pobre, población vulnerable no pobre y población no vulnerable. Efectivamente, Uruguay tiene una población que es vulnerable, pero es la más baja de América Latina, inclusive, más baja que Argentina. Vean el informe de Clarisa Hardy para la Cepal, realizado en el Encuentro de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en agosto del año pasado. De hecho, Clarisa Hardy vino a Uruguay a exponer su trabajo, mostrando que estábamos no solo en el menor rango en cuanto a la indigencia y a la pobreza, sino también en vulnerabilidad.

Esa es la matriz de protección social. Otra cosa es el empleo, que es la manera que tienen los trabajadores de conseguir un ingreso que le permite comprar los bienes que la matriz de protección social no le da. La matriz de protección social no da alimentos, ni vestimenta. Eso lo da el ingreso monetario en el mercado de bienes y servicios. Pero ese ingreso que genera el empleo no tiene nada que ver con cubrir sus servicios básicos sociales, porque eso está cubierto, gane \$ 5, \$ 1.000 o \$ 2.000. Ahora, como dijo la Legisladora Tourné, si para el Frente Amplio en estos años de gobierno el empleo no hubiera sido muy importante, el desempleo no hubiera caído a 6,1 %.

Quiero recordar tres cosas. La primera: en la ley de promoción de inversiones el crédito fiscal depende del nivel de empleo que genera quien se presenta a promover la inversión. En este Parlamento, en el año 1997 se votó la ley de inversiones, que no contenía ningún artículo que promoviera las inversiones según el empleo. En ese momento, me tocó venir como representante de la central de trabajadores a pedir que se incluyera el famoso artículo 9.º que –quiero decirlo– no se reglamentó hasta la Reglamentación n.º 480 de 2007 se estableció cómo se diferenciaba una promoción de inversiones si generaba empleo o no. Antes no se reglamentaba: daba lo mismo el nivel de empleo que se generaba.

El segundo elemento al que me quiero referir es a la reforma tributaria, que también incluyó descuentos. Antes, en Uruguay el impuesto a la renta solo consideraba reinversión cuando se reinvertía en capital físico. Parecía que reinvertir en mayor masa salarial no era una reinversión. Ahora hay descuentos de reinversión, tanto en capital físico como en salarios. Y no quiero hablar de capital humano, porque me parece una expresión que no corresponde, y que es parte de la lógica ideológica en la que hemos subsumido parte de nuestro pensamiento.

El tercer ejemplo es que, a pesar de esos esfuerzos y de ese desempleo que está por debajo del desempleo estructural hay sectores que todavía tienen tasas de desempleo mayores que la estructural. Me refiero particularmente a los jóvenes. Para eso pro-

pusimos –y se aprobó en este Parlamento, reconozco que por unanimidad– una ley de empleo juvenil que está siendo reglamentada y que empezará a regir en marzo, que subsidia en hasta un 25 % el salario a las empresas que tomen jóvenes.

El Legislador Solari hace una mala interpretación de mi nota, en la cual simplemente hago una distinción. Decir que el empleo es una política social es como decir que la inversión pública es una política social. No; la inversión pública es la inversión pública; el empleo y el salario es el mercado de trabajo, y la política social es la matriz de protección social que permite cubrir los servicios sociales básicos que históricamente debe cubrir el Estado. Quería referirme a esta cuestión porque me parece que es lo que le da globalidad.

Si no tuviéramos esta matriz de protección social, si ANEP no tuviera US\$ 1.800:000.000, si ASSE no tuviera US\$ 1.000:000.000, todas las personas que salieron de la emergencia no hubieran tenido atención sanitaria y educativa como han tenido. La tienen, porque el sistema público existe.

Es verdad lo que dice el Legislador Solari en cuanto a que todavía hay gente que, a pesar del enorme crecimiento de los derechos que se ha generado en este período, no los conoce. Eso es así. Tanto es así que los programas: Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y Cercanías, parten de la base de que no hay que esperar que la población venga a buscar esos derechos, sino que hay que ir a buscarla. Es una de las características de estos programas de nueva generación de los que se hablaba, que con poco menos de un año y medio de vida –en algunos casos un poquito más y en otros casos un poquito menos– están dando tantos resultados. Por eso es que cuando Cepal nos pide que difundamos nuestra matriz de protección social lo hace pensando en ese doble juego: la matriz de servicios universales y los servicios focalizados, que son *by-pass*, transferencias, puertas de entrada a los servicios universales.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Despedimos al señor Ministro y a sus asesores. Luego, tenemos dos o tres asuntos para considerar de la Comisión Permanente.

(Se retiran de Sala el señor Ministro de Desarrollo Social y sus asesores).

–El martes, en la convocatoria del señor Legislador Pasquet al señor Ministro de Relaciones Exteriores, hubo problemas técnicos externos al Palacio Legislativo que no permitieron transmitir la sesión a través de Internet. Eso lo grabamos y se le hizo llegar una copia de la sesión al señor Legislador Pasquet y

mañana se va a difundir por Internet a partir de la hora 14. Vamos a pasar la sesión entera, yo lo voy a informar por la mañana en un comunicado de prensa, ya lo estamos dando a conocer y quería que el Cuerpo lo supiera.

El segundo asunto es que hay una propuesta que no llevamos a cabo: crear una Comisión para la reforma del Reglamento de la Comisión Permanente, que es un viejo planteo del Legislador Baráibar. La Comisión no funcionó, y ya no tiene tiempo de hacerlo. Solo el Frente Amplio nombró un representante, y el trabajo que tuvimos en la Comisión Permanente fue bastante intenso. Esto quedará para la próxima Comisión Permanente. Inclusive, hay una síntesis de propuestas que ha hecho el señor Secretario que la vamos a incorporar al documento presentado por el señor Legislador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: cuando propusimos esa idea en la primera sesión de la Comisión Permanente no sabíamos que íbamos a tener este programa de convocatorias a Sala. Evidentemente, eran temas con mayor jerarquía que correspondía atender en primer término. La prueba está en que mañana es el último día y hoy todavía estamos sesionando.

Dar una base jurídica al Reglamento de la Comisión Permanente es algo muy importante. El Senado nombra a los integrantes de la Comisión Permanente como corresponde, a principios de año; la Cámara de Diputados demora más. Sería bueno que se recomendará cumplir con la norma que establece que se deben nombrar a comienzos del año, para que quienes integren la Comisión Permanente del año próximo puedan entrar en contacto con este tema lo antes posible. Quizás el señor Secretario se pueda reunir con ellos informalmente para cambiar ideas sobre el asunto, analizar el proyecto elaborado por él y los antecedentes presentados por nosotros, y ponerlos a su disposición.

Voy a hacer una consideración de tipo político. ¿Por qué creo que es importante tener un Reglamento? En varias ocasiones tuvimos que resolver algunas cosas; lo hicimos razonablemente y en acuerdo, pero desde 1985 para acá siempre en la Comisión Permanente ha habido mayorías correspondientes al Poder Ejecutivo. Para esta próxima elección se ha especulado mucho –y aquí tenemos al especialista en especular acerca de que quien gane el Poder Ejecutivo no logre mayorías parlamentarias– sobre la posibilidad de que el Ejecutivo no tenga mayorías en

el Parlamento. Eso puede generar una situación de tensión desde el punto de vista reglamentario. Sería bueno que no haya muchas incertidumbres y que este tema no quede librado a la buena voluntad, sino que tengamos las garantías de un contrato al que todos nos deberemos remitir. No quiero hacer pronósticos para el futuro, pero es algo que puede ocurrir, y sería bueno que la Comisión Permanente funcione como debe hacerlo.

Para terminar, agradezco a los funcionarios, al señor Presidente, a los señores Secretarios y a los colegas que han trabajado en la Comisión Permanente. Hemos trabajado intensamente; buena parte de la agenda nacional estuvo en la Comisión Permanente y podemos estar satisfechos de haber cumplido con la tarea encomendada, dentro de nuestras posibilidades, de la mejor manera posible.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- De modo que no pudimos cumplir con esa tarea tan importante, la que pasará a la próxima Comisión Permanente. Aun con un Reglamento que fuimos construyendo en nuestras discusiones, hemos logrado crear un buen clima, en el que cada uno pudo libremente expresar sus puntos de vista. Nunca pensé que algún día podría ser Presidente de una Comisión Permanente. Les agradezco por haberme designado y por el buen clima que los integrantes del Cuerpo generaron, junto con los funcionarios que nos apoyaron.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: en función del aspecto que acaba de mencionar, en nombre del Partido Nacional quiero dejar constancia de nuestra satisfacción por la tarea cumplida en el marco de la más absoluta tolerancia y convivencia democrática, como corresponde. En ese contexto, quiero destacar el papel que le cupo como Presidente de esta Comisión Permanente, el que cumplió a cabalidad en cuanto a que a todos nos dio las garantías suficientes como para desarrollar nuestra tarea, manteniendo la ecuanimidad necesaria, inherente a la posición que le tocó ocupar. Ese es el reconocimiento que en nombre de mi Bancada quiero realizar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: es notorio que quien ha representado al Partido Colorado en esta Comisión Permanente ha sido el señor Legislador Pasquet, quien me ha manifestado exactamente lo mismo que acaban de expresar los Legisladores Baráibar y Abdala en cuanto al buen clima en que se ha conducido. Por lo tanto, el agradecimiento a los funcionarios y las felicitaciones al señor Presidente por el rol desempeñado.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Legisladora.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: para nuestra fuerza política ha sido un gusto trabajar en esta Comisión Permanente. Creo que las discusiones, por acaloradas que sean, siempre son un aporte. Soy una convencida, y nuestra fuerza política también, de que manifestar las diferencias, ponerlas sobre la mesa, debatir sobre ellas es una riqueza que la democracia aporta y que pretendemos profundizar.

Queremos agradecer a los Legisladores Abdala y Solari, quienes acaban de manifestar su complacencia con su Presidencia, y también reconocer que hicimos una buena opción al depositar sobre sus espaldas la responsabilidad de conducir estos debates, con los que a veces no contribuimos demasiado en lo que respecta a la buena disciplina, pero que han logrado un buen término. Además, los asuntos que estuvieron sobre la mesa no tienen por qué ser tema cerrado, sino que fue un buen ámbito para pensar temáticas que realmente hacen al vivir de los uruguayos y las uruguayas, y que deben importarnos mucho.

Otra vez ha sido para quien habla y para todos los integrantes de la Bancada del Frente Amplio un gusto formar parte de esta Comisión Permanente y trabajar con tan distinguidos colegas de otras colectividades políticas como lo hemos hecho.

SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR RADÍO.- Señor Presidente: suscribo las palabras de los Legisladores preopinantes y quiero manifestar en nombre del Partido Independiente la

plena satisfacción con la gestión de la Presidencia de la Comisión Permanente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos por culminada la gestión de la Comisión Permanente 2013-2014.

6) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Es la hora 14 y 36).

ERNESTO AGAZZI

Presidente

Hugo Rodríguez Filippini

Secretario

José Pedro Montero

Secretario

Julio Míguez

Director del Cuerpo de Taquígrafos
de la Cámara de Representantes

Corrección y Control

División Diario de Sesiones del Senado

Armado e Impreso

División Imprenta del Senado